Cuaderno V



MALVINAS
va a la **Escuela**

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

Observatorio de Memoria,
Investigación y Soberanía

MALVINAS, ATLÁNTICO SUR Y ANTÁRTIDA

RES. N° 4937/2025



UNR Universidad Nacional de Rosario

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

Director
Juan Facundo Besson

Integrantes
María Salomón
Gonzalo Pellegrini
Sebastián Melano
Ernesto Dufour
Joaquín Pereyra
Juliana Krenz
Celina Tornimbeni

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

Malvinas
va a al Escuela

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

"Ningún pueblo defiende aquello que desconoce. Ninguna generación transmite aquello que no comprende."

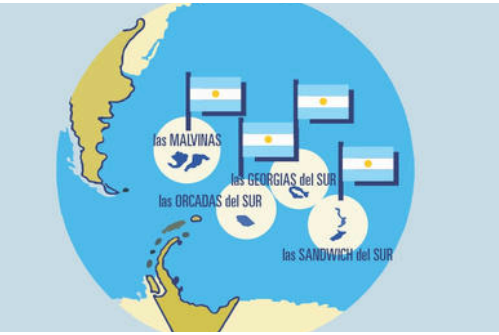


Plataforma Malvinas

Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Agencia de Innovación

SOBRE EL OBSERVATORIO



El Observatorio de Memoria, Investigación y Soberanía "Malvinas, Atlántico Sur y Antártida" de la Universidad Nacional de Rosario fue creado mediante la Resolución Rectoral N.º 4937/2025 con la finalidad de constituirse en un espacio permanente de producción científica, formación académica, preservación de la memoria y vinculación institucional en torno a la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida. Desde su creación, el Observatorio ha asumido una concepción de la universidad pública que trasciende la mera generación de conocimiento especializado, entendiendo que la investigación adquiere su verdadero sentido cuando dialoga con la comunidad y contribuye a la formulación de políticas públicas orientadas a la defensa de la soberanía nacional.

Esta perspectiva se traduce en una intensa actividad académica y de extensión. El Observatorio impulsa proyectos de investigación interdisciplinarios; desarrolla cursos de formación universitaria y de actualización profesional; organiza seminarios, jornadas, conversatorios y ciclos de conferencias; participa en redes nacionales de investigación; produce publicaciones científicas y materiales pedagógicos; promueve la difusión del conocimiento mediante plataformas digitales y medios audiovisuales; y articula acciones con universidades, centros de investigación, organismos públicos, colegios profesionales y organizaciones de veteranos de guerra. Su integración al proyecto federal "Voces de Malvinas", destinado a preservar los testimonios orales de los combatientes de 1982 como patrimonio documental de la Nación, constituye una de sus iniciativas más relevantes en materia de memoria histórica.

A ello se suma una labor permanente en el campo educativo. El Observatorio concibe la enseñanza de la Cuestión Malvinas como una política de Estado fundada en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional y las normas que incorporan el mapa bicontinental

argentino como contenido obligatorio. En consecuencia, desarrolla propuestas destinadas a docentes, estudiantes y público en general, procurando que la soberanía deje de ser un tema exclusivamente universitario para convertirse en un saber socialmente compartido. La elaboración de recursos didácticos, la capacitación docente, la organización de cursos abiertos y la construcción de redes federales de cooperación reflejan esta vocación por democratizar el conocimiento y fortalecer una conciencia soberana desde una perspectiva crítica, interdisciplinaria y latinoamericana.

La actividad del Observatorio también se proyecta sobre el plano institucional mediante una intensa política de cooperación con universidades nacionales, organismos estatales, centros de veteranos de guerra, instituciones educativas y organizaciones de la comunidad. Esta metodología responde a la convicción de que la soberanía constituye una construcción colectiva que requiere la articulación permanente entre el conocimiento científico, la memoria histórica y la participación ciudadana. Desde esta perspectiva, la universidad pública deja de ser un ámbito exclusivamente destinado a la producción académica para convertirse en un actor comprometido con la realidad nacional, capaz de generar conocimiento útil para la sociedad e incidir en la formulación de políticas públicas vinculadas con la memoria, la educación y la soberanía.

Este compromiso encuentra un sólido fundamento jurídico en el ordenamiento argentino. En primer lugar, la Ley de Educación Nacional N.º 26.206 establece que forman parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones "la causa de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, de acuerdo con lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional", incorporando así la Cuestión Malvinas como una política educativa permanente y no como un contenido meramente conmemorativo. A su vez, la Ley N.º 26.651 dispone la utilización obligatoria del Mapa Bicontinental de la República Argentina en todos los niveles y modalidades del sistema educativo y ordena su exhibición en los organismos públicos, consolidando una representación cartográfica acorde con la verdadera dimensión territorial del país. En igual sentido, la Constitución de la Provincia de Santa Fe, reformada en 2025, establece en su artículo 4 la irrenunciable soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, los espacios marítimos correspondientes, la Antártida y la plataforma continental, imponiendo además al Estado provincial la promoción de políticas educativas orientadas al ejercicio de la memoria activa. Sobre estos pilares normativos se asienta buena parte del trabajo institucional desarrollado por el Observatorio.

Dentro de esa estrategia de vinculación reviste especial importancia el trabajo conjunto desarrollado con AMSAFE Rosario, delegación de la Asociación del Magisterio de Santa Fe e integrante de CTERA. Esta articulación trasciende ampliamente una cooperación institucional circunstancial, pues expresa una concepción profundamente arraigada en la tradición nacional: la necesidad de que la universidad pública dialogue con las organizaciones libres del pueblo,

entendidas como aquellos cuerpos intermedios que canalizan la participación de la comunidad y fortalecen la vida democrática. En esta perspectiva, la producción del conocimiento no se agota en el ámbito universitario, sino que adquiere sentido cuando es apropiada por quienes diariamente intervienen en la formación de las nuevas generaciones.

El curso "Malvinas va a la escuela", organizado conjuntamente por el Observatorio y AMSAFE, constituye una manifestación concreta de ese modelo de articulación. Su finalidad consiste en brindar a docentes de todos los niveles herramientas históricas, jurídicas, geopolíticas, económicas, simbólicas y pedagógicas que permitan incorporar la Cuestión Malvinas al proceso de enseñanza conforme a los mandatos establecidos por la Ley de Educación Nacional, la Ley del Mapa Bicontinental y el artículo 4 de la Constitución santafesina. De este modo, la formación docente deja de circunscribirse a la transmisión de contenidos para transformarse en una verdadera política pública de construcción de ciudadanía, orientada a fortalecer una comprensión crítica de la soberanía nacional y de la proyección argentina sobre el Atlántico Sur y la Antártida.

La vinculación con AMSAFE posee, además, un profundo significado institucional y pedagógico. El magisterio organizado constituye uno de los principales actores de la educación pública argentina y un vehículo privilegiado para que el conocimiento producido en la universidad llegue efectivamente a las aulas y a las nuevas generaciones. En esa convergencia entre investigación, extensión universitaria y formación docente se expresa una concepción de la universidad comprometida con el interés público, capaz de poner su producción científica al servicio de la comunidad organizada y de contribuir al fortalecimiento de la conciencia nacional.

En consecuencia, la cooperación entre el Observatorio y AMSAFE no sólo permite dar cumplimiento efectivo a los mandatos establecidos por la legislación nacional y provincial en materia de enseñanza de la Cuestión Malvinas, utilización del mapa bicontinental y promoción de una memoria activa, sino que también reafirma el papel de la universidad pública como institución al servicio del pueblo. La defensa de la soberanía no depende exclusivamente de la acción diplomática, del derecho internacional o de las decisiones estatales; requiere también una ciudadanía formada en el conocimiento de su historia, de su territorio y de sus derechos. Allí radica el sentido más profundo del Observatorio: contribuir, desde la investigación, la educación y el trabajo conjunto con las organizaciones libres del pueblo, a consolidar una cultura de la soberanía que trascienda las coyunturas y se proyecte como una auténtica política de Estado.

Juan Facundo Besson
Director

La Cuestión Malvinas

Soberanía, historia y futuro de una Argentina bicontinental

"Malvinas no es solo un territorio, es una parte esencial de nuestra historia, de nuestra geografía y de nuestro porvenir."



Más allá de Malvinas nuestro mar, nuestros recursos, nuestra soberanía.

UNA UBICACIÓN ESTRATÉGICA



FUNDAMENTOS ARGENTINOS

- Resolución 2065 (XX) Asamblea General de la ONU (1965)
- Derecho de Integridad Territorial (Carta de la ONU)
- Existencia de una disputa de soberanía. Llamado a negociar.
- Continuidad histórica, geográfica y jurídica con la Argentina.
- Defensa de los recursos del Atlántico Sur para las generaciones presentes y futuras.



...as Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur forman parte ...

PRINCIPALES HITOS

- **1520** Expedicions españolas avistan las islas (Magallanes - Elcano).
- **1690** Primer desembarco inglés (John Strong).
- **1764** Louis A. de Bougainville establece Port Saint Louis.
- **1767** España toma posesión y funda Puerto de Nuestra Señora de la Soledad.
- **1810** La Revolución de Mayo reafirma los derechos de España en América.
- **1820** David Jewett toma posesión en nombre de las Provincias Unidas.
- **1829** El gobierno argentino crea la Comandancia Política y Militar de las Malvinas (Luis Vernet).
- **1833** Ocupación británica por la fuerza. Expulsión de las autoridades argentinas.
- **1841** Inicio de la explotación ovejera por parte del Reino Unido.
- **1945** La ONU incorpora la cuestión Malvinas a la agenda internacional.
- **1965** Resolución 2065 (XX) de la ONU. Reconoce la disputa de soberanía y llama a negociar.
- **1982** Recuperación transitoria de las islas. Guerra del Atlántico Sur.
- **1990** Reanudación de negociaciones (Comunicado de Madrid).
- **2013** Referéndum ilegítimo organizado por el Reino Unido.
- **2020** El Reino Unido amplía el área marina protegida. Continúa la explotación de recursos.





"La expansión marítima británica y el control de las rutas oceánicas.

RECURSOS EN DISPUTA



Hidrocarburos



Recursos pesqueros



Recursos minerales



Proyección antártica y científica

"Un Atlántico Sur rico en recursos, estratégico para el futuro.



ARGENTINA BICONTINENTAL





Memoria, Soberanía, Futuro.

Malvinas es

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

MALVINAS Y GUERRA HÍBRIDA

Introducción

La enseñanza de la Cuestión Malvinas suele quedar atrapada entre dos grandes momentos: la ocupación británica de 1833 y la guerra de 1982. Ambos son indispensables, pero resultan insuficientes para explicar qué ocurre actualmente en el Atlántico Sur. Entre la memoria histórica, el reclamo jurídico-diplomático y la conmemoración del conflicto existe un presente material que también debe ser enseñado: alrededor de las islas se capturan recursos pesqueros, se proyecta la explotación de hidrocarburos, se administran espacios marítimos, se movilizan capitales internacionales, se regula una población, se construye infraestructura, se despliega poder militar y se producen discursos destinados a legitimar internacionalmente una determinada situación territorial. La Cuestión Malvinas, por ello, no pertenece solamente al pasado. Es una disputa que continúa produciendo efectos concretos sobre el territorio argentino y su proyección sobre el Atlántico Sur.

Desde esta perspectiva, puede observarse que distintas acciones, aun cuando pertenezcan a ámbitos diferentes, terminan relacionándose. Una decisión sobre pesca puede generar ingresos públicos; esos ingresos pueden utilizarse para financiar infraestructura; esa infraestructura facilita nuevas actividades económicas y mejora la conectividad; la expansión económica demanda trabajadores; las normas migratorias regulan quién puede residir y permanecer en las islas; y todo ese conjunto contribuye a fortalecer una administración que ejerce control cotidiano sobre el territorio. El interés educativo se encuentra precisamente en descubrir esas conexiones y comprender que economía, población, derecho, infraestructura y política no funcionan como compartimentos separados.

Los recursos naturales permiten observar con especial claridad este proceso. La historia económica de las islas muestra tres grandes momentos: la lana, la pesca y los hidrocarburos. Durante buena parte de los siglos XIX y XX, la ganadería ovina organizó la propiedad de la tierra, las estancias, el trabajo y los circuitos comerciales. A partir de las

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

últimas décadas del siglo XX, el centro económico se desplazó progresivamente hacia el mar mediante la explotación pesquera y el sistema de licencias. En la actualidad, los proyectos vinculados con hidrocarburos *offshore* incorporan una nueva dimensión, porque extienden el interés económico desde las aguas hacia el lecho y el subsuelo marino.

Cada uno de estos recursos genera, además, una red de relaciones más amplia. La lana necesita tierra, trabajadores, establecimientos rurales, transporte y mercados. La pesca requiere embarcaciones, licencias, vigilancia marítima, puertos, científicos y compradores internacionales. Los hidrocarburos necesitan capitales, empresas especializadas, tecnología, infraestructura, servicios logísticos y seguridad. De este modo, el valor de un recurso no depende solamente de su existencia natural, sino de la capacidad para organizar todo lo necesario para aprovecharlo. Esa capacidad de organizar recursos, población, normas e infraestructura constituye una de las formas concretas mediante las cuales se ejerce poder sobre un territorio.

Malvinas puede enseñarse, entonces, como una trama de relaciones situada en un punto de particular importancia geoestratégica. Su valor no deriva solamente de los recursos disponibles en las islas y sus espacios marítimos, sino también de su posición en el Atlántico Sur, próxima a los accesos australes entre los océanos Atlántico y Pacífico, vinculada con las rutas que rodean el cabo de Hornos y con la proyección hacia la Antártida. En la planificación británica, además, las islas no aparecen completamente aisladas, sino relacionadas con otros territorios y posiciones de ultramar que conforman una presencia de alcance mundial: Gibraltar en el ingreso occidental al Mediterráneo; las bases soberanas de Chipre en el Mediterráneo oriental; Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña en el Atlántico; y, en el espacio austral, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, según la toponimia británica. La propia planificación de defensa británica presenta estas posiciones de ultramar como parte de una red capaz de proporcionar alcance geográfico y apoyo logístico a sus fuerzas desplegadas.

Esa posición geográfica ayuda también a comprender la importancia del despliegue militar y de la infraestructura logística existente en las islas. El complejo de Monte Agradable articula capacidades aéreas, terrestres,

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

de vigilancia y comunicaciones, mientras que *East Cove-Mare Harbour* funciona como principal nodo logístico marítimo de las fuerzas británicas en el Atlántico Sur y puede recibir unidades navales y buques auxiliares. El propio Ministerio de Defensa británico vincula las fuerzas asentadas en Malvinas con las restantes islas del atlántico sur subantarticas y la isla Ascensión, mostrando que el dispositivo excede la defensa inmediata del archipiélago y forma parte de una arquitectura regional más amplia.

Esta infraestructura adquiere además relevancia en un mundo donde más del 80 % del volumen del comercio internacional de mercancías se transporta por vía marítima y donde los océanos continúan siendo las grandes vías físicas de circulación de materias primas, energía, alimentos y productos industriales. Las rutas australes no concentran el mismo tráfico que Suez, Panamá o Malaca, pero conservan importancia como vías interoceánicas alternativas y su valor estratégico puede aumentar cuando existen interrupciones, conflictos o restricciones sobre los pasos principales. La posición de Malvinas debe entenderse, por ello, dentro de una geografía más extensa de puertos, rutas oceánicas, estrechos y puntos de apoyo desde los cuales es posible observar, sostener y proyectar actividad marítima.

Por eso una licencia pesquera necesita una autoridad que la otorgue y medios capaces de controlar su cumplimiento; los ingresos obtenidos fortalecen la administración local; esa administración sostiene servicios e infraestructura; la infraestructura facilita nuevas inversiones y mejora la capacidad logística; las inversiones atraen trabajadores y generan nuevas necesidades de conectividad; las normas determinan las condiciones de residencia y pertenencia; y las capacidades militares y tecnológicas proporcionan una garantía material al control del espacio. A su vez, la ubicación de las islas conecta todas esas dimensiones con un escenario mucho mayor: el Atlántico Sur, los pasos interoceánicos, las restantes posiciones británicas de ultramar y la proyección antártica. Ninguno de estos elementos explica por sí solo la situación, pero juntos permiten comprender por qué un archipiélago relativamente pequeño posee una importancia estratégica considerable.

Esta mirada permite comprender también la soberanía de una manera más concreta. La soberanía no consiste solamente en formular un derecho sobre un territorio, sino en disponer de capacidades para

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

conocerlo, administrarlo, proteger sus recursos, controlar sus espacios marítimos, sostener comunicaciones y participar de las redes logísticas que atraviesan una región. En un espacio oceánico como el Atlántico Sur, puertos, aeropuertos, radares, buques, investigación científica, infraestructura energética y sistemas de comunicación forman parte de esa capacidad. Por eso la enseñanza de Malvinas puede superar la repetición de fechas y consignas y convertirse en una oportunidad para que los estudiantes comprendan cómo se relacionan posición geográfica, territorio, recursos, rutas marítimas, población, conocimiento, infraestructura y poder. La pregunta que atraviesa este cuaderno puede formularse entonces de manera más amplia: ¿qué necesita una comunidad política para conocer, organizar y decidir efectivamente sobre su territorio, sus recursos y el espacio estratégico del que forma parte?

I.Guerra híbrida y Zona Gris: una clave para leer Malvinas

Para comprender la Cuestión Malvinas en el presente es necesario distinguir el conflicto de 1982 de la controversia que continúa después de ella. El enfrentamiento armado tuvo una duración determinada, pero la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido permaneció abierta y las condiciones materiales en las que se desarrolla siguieron transformándose. Después de 1982 se modificaron la infraestructura de las islas, su economía, la explotación de los recursos marítimos, las comunicaciones, la composición de la población y el dispositivo militar británico. También se desarrollaron nuevas normas, actividades empresariales y vínculos internacionales que contribuyeron a organizar de otra manera el territorio y los espacios marítimos circundantes. Para el docente, éste es el primer punto que debe quedar claro: la ausencia de una guerra abierta no significa ausencia de conflicto, competencia o transformación. Malvinas no constituye una fotografía detenida en 1982, sino una cuestión histórica y política que continúa desarrollándose en el presente.

Las categorías de guerra híbrida y Zona Gris ofrecen una herramienta para comprender esa complejidad, siempre que se utilicen con precisión. Frank G. Hoffman desarrolló la noción de guerra híbrida para estudiar la combinación de diferentes modalidades e instrumentos de conflicto, mientras que Michael J. Mazarr examinó la Zona Gris como un espacio de

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación
Observatorio Malvinas

competencia que se desarrolla sin alcanzar necesariamente el umbral de la guerra abierta. Aplicadas a Malvinas, estas categorías no significan afirmar que la Argentina y el Reino Unido se encuentren actualmente en guerra ni que cualquier decisión económica, jurídica o cultural constituya por sí misma una acción bélica. Su utilidad es más concreta: permiten preguntar cómo se relacionan diferentes instrumentos de poder cuando actúan sobre un mismo territorio, sus recursos, su población y sus posibilidades de desarrollo. La categoría sirve, por lo tanto, como método de lectura antes que como etiqueta.

Lo fundamental de este enfoque no consiste en sumar dimensiones, sino en comprender las relaciones que existen entre ellas. Una licencia pesquera pertenece inicialmente al ámbito económico y administrativo, pero necesita una autoridad que la otorgue, normas que determinen sus condiciones y medios capaces de controlar la actividad autorizada. La pesca produce ingresos, demanda barcos, trabajadores, puertos, combustible, comunicaciones y mercados; esos ingresos pueden sostener servicios e infraestructura, mientras que la infraestructura facilita nuevas actividades económicas. Una regulación migratoria cumple una función administrativa, pero también establece las condiciones bajo las cuales determinadas personas pueden residir y trabajar. Un aeropuerto sirve para transportar pasajeros y cargas, aunque simultáneamente aumenta la conectividad y la capacidad logística del territorio. El pensamiento estratégico comienza precisamente en este punto: cuando dejamos de observar cada hecho de manera aislada y comenzamos a preguntarnos qué relaciones produce y qué capacidades contribuye a sostener.

La posición geoestratégica de Malvinas proporciona el espacio dentro del cual esas relaciones adquieren sentido. Las islas se encuentran en el Atlántico Sur, próximas al extremo austral del continente americano, vinculadas con los pasos interoceánicos australes y situadas en un espacio de proyección hacia la Antártida. Su importancia no deriva, por lo tanto, solamente de la superficie terrestre del archipiélago o de los recursos existentes en sus aguas, sino también de su ubicación dentro de una geografía oceánica mucho mayor. Para una potencia marítima, un punto geográfico adquiere especial relevancia cuando dispone de aeropuerto, puerto, comunicaciones, vigilancia, abastecimiento y

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

capacidad de sostener una presencia permanente. Esta perspectiva permite además relacionar Malvinas con otras posiciones británicas de ultramar sin presentarlas erróneamente como instalaciones equivalentes: Gibraltar, Ascensión, Santa Elena, Georgias del Sur y Sandwich del Sur cumplen funciones y poseen regímenes diferentes, pero permiten observar una geografía británica de presencia y conectividad ultramarina.

La infraestructura y la logística convierten esa posición geográfica en una capacidad efectiva de acción. Un territorio distante no puede sostenerse únicamente mediante su ubicación en el mapa: necesita transportar personas, combustible, alimentos, equipamiento e información; mantener comunicaciones; recibir barcos y aeronaves; reparar instalaciones y vigilar los espacios circundantes. En Malvinas, el complejo militar de Monte Agradable constituye un elemento central de esa estructura y articula aeródromo, vigilancia y capacidades militares permanentes. Los materiales de la biblioteca destacan precisamente su importancia para la defensa de las islas y para la vigilancia estratégica del Atlántico Sur. Esta relación puede expresarse pedagógicamente mediante una secuencia sencilla: posición geográfica → infraestructura → logística → vigilancia → capacidad de acción. El mapa deja así de mostrar solamente dónde se encuentran las islas y comienza a explicar por qué esa ubicación posee importancia.

Los recursos naturales introducen otra pieza fundamental de esta trama. La evolución económica de las islas permite reconocer una secuencia histórica particularmente clara: lana, pesca e hidrocarburos. Durante buena parte de los siglos XIX y XX, la ganadería ovina estructuró la economía terrestre; posteriormente, la explotación de los recursos marítimos adquirió una importancia creciente y la pesca pasó a ocupar una posición central; finalmente, la exploración y los proyectos de explotación de hidrocarburos ampliaron el interés económico hacia el lecho y el subsuelo marino. Se identifica esta transformación desde una economía fundamentalmente lanera hacia otra crecientemente vinculada con los recursos del mar. Para el docente, lo importante es mostrar que un recurso no produce poder por su sola existencia: requiere conocimiento, tecnología, trabajadores, empresas, capital, normas, transporte, infraestructura y capacidad para controlar el espacio donde

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

se encuentra. El recurso permite así conectar geografía, economía, derecho, población y tecnología.

La relación entre economía, población y distribución de la renta permite dimensionar materialmente la cuestión. Según las últimas cuentas nacionales disponibles, en 2024 el PBI nominal de las islas alcanzó £288 millones, de los cuales £168 millones (58,3 %) correspondieron a pesca y acuicultura; el PBI per cápita fue de aproximadamente £86.050. Sin embargo, esta última cifra no equivale al ingreso de cada habitante: parte del valor generado corresponde a empresas, accionistas y trabajadores no residentes, razón por la cual el ingreso nacional bruto per cápita fue sensiblemente menor. La renta beneficia, en proporciones diferentes, a la administración isleña —mediante licencias, impuestos y tasas—, empresas pesqueras y titulares de cuotas, trabajadores y proveedores, y capitales externos vinculados a la explotación y comercialización de los recursos. En los hidrocarburos, esta internacionalización se observa claramente en Sea Lion, actualmente participado por Navitas Petroleum (65 %) y Rockhopper Exploration (35 %).

Esta economía se sostiene sobre una población extraordinariamente reducida y fuertemente relacionada con la movilidad laboral. El Censo 2021, último censo integral disponible, estimó 3.662 residentes habituales y registró, dentro de las categorías de estatus migratorio, 2.089 *Falkland Islanders/Status Holders*, 770 titulares de *Work Permits* y 331 titulares de *Permanent Residence Permits*. Para el docente, la comparación es particularmente expresiva: una población de apenas algunos miles de personas administra una economía de cientos de millones de libras, sustentada principalmente en recursos marítimos y conectada con empresas y trabajadores de diversos países. Esto permite comprender por qué población, recursos, migraciones, empresas, normas y distribución de la renta deben estudiarse conjuntamente: el elevado PBI per cápita no describe por sí solo cómo se distribuye la riqueza, sino la enorme magnitud económica de los recursos explotados en relación con el reducido tamaño de la población.

II. la formación de la economía colonial en Malvinas

La dimensión económica de la Cuestión Malvinas permite comprender

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

cómo una ocupación territorial puede adquirir viabilidad material y capacidad de reproducción en el tiempo. Después de 1833, el control británico no se sostuvo exclusivamente mediante presencia militar o decisiones administrativas: fue acompañado por la organización de la tierra, la incorporación de capital privado, la explotación de recursos, el establecimiento de circuitos comerciales y la formación de una población vinculada a esas actividades. Desde mediados del siglo XIX pueden reconocerse tres grandes momentos económicos: primero, la explotación ganadera y especialmente la lana; después, la conversión del mar en principal fuente de renta mediante la pesca; finalmente, la incorporación progresiva de los hidrocarburos y de nuevas actividades como la acuicultura. La continuidad entre esas etapas no reside en que sean negocios idénticos, sino en una misma pregunta estratégica: qué recursos existen, quién obtiene autorización para explotarlos, quién recibe la renta y de qué manera esa riqueza contribuye al sostenimiento de la administración británica de las islas.

El primer gran actor privado de esa historia fue Samuel Fisher Lafone. En 1846 obtuvo del gobierno colonial británico derechos vinculados con una extensa superficie de la isla Soledad y con la explotación del ganado existente, en un área de aproximadamente 600 millas cuadradas que terminaría siendo conocida como Lafonia. Lafone ni siquiera se instaló personalmente en las islas: administró inicialmente sus intereses mediante agentes y financiamiento comercial. La propia historia institucional de la *Falkland Islands Company* reconoce que las estimaciones iniciales sobre la cantidad y el valor del ganado cimarrón resultaron excesivamente optimistas y que el emprendimiento comenzó rápidamente a experimentar dificultades financieras. Esa crisis condujo a Alexander Ross Lafone, hermano de Samuel, y a los comerciantes londinenses que financiaban la operación a promover una sociedad por acciones capaz de reunir nuevos capitales. El caso permite mostrar en el aula que la colonización económica no fue simplemente una consecuencia automática de la ocupación: requirió capital, empresas, propiedad y organización comercial.

De ese proceso surgió la *Falkland Islands Company* —FIC—, constituida en 1851 y beneficiada el 10 de enero de 1852 con una *Royal Charter* otorgada por la reina Victoria. Su programa original combinaba

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

explotación de ganado, desarrollo de la cría ovina, establecimiento de un comercio general y organización de comunicaciones con el continente y Europa. John Dale fue designado primer *Colonial Manager*; después de diversos problemas iniciales, la transformación empresarial adquirió mayor impulso con Frederick E. Cobb, llegado como gerente colonial en 1867. Cobb reorganizó las explotaciones ganaderas, combatió enfermedades del ganado e impulsó la conversión hacia la producción ovina. Cuando dejó las islas en 1891, los rebaños de la compañía habían pasado, según la propia reconstrucción histórica empresarial, de unos 35.000 animales afectados por sarna a alrededor de 150.000 ovejas en mejores condiciones productivas. Posteriormente Cobb se convirtió en director gerente de la compañía en Inglaterra y luego en su presidente.

La FIC fue mucho más que una estancia. A medida que creció, integró tierra, producción, comercio, transporte y servicios, lo que le permitió participar en numerosos aspectos de la vida económica isleña. Una operación particularmente importante fue la adquisición de los negocios de la familia Dean, competidora histórica de la compañía. Con ella incorporó el *West Store*, establecimientos comerciales, propiedades, embarcaciones, reparación naval y actividades bancarias ligadas a los productores ganaderos.

Hacia mediados del siglo XX había llegado a poseer alrededor de 1,2 millones de acres y aproximadamente 300.000 ovejas, mientras documentos diplomáticos estadounidenses de comienzos de la década de 1980 describían a la empresa como propietaria de cerca de la mitad de la tierra y de aproximadamente la mitad del stock ovino, además de controlar el principal comercio, almacenes, transporte interinsular y servicios portuarios. Para el docente, esta concentración permite introducir el concepto de integración vertical: una misma organización puede intervenir desde la producción primaria hasta la comercialización y el transporte del producto.

La lana fue durante más de un siglo el centro de ese sistema económico. Las condiciones ecológicas de las islas favorecieron una ganadería extensiva, con grandes superficies y una densidad humana muy baja. La cadena productiva puede reconstruirse con facilidad: tierra → oveja → esquila → clasificación → enfardado → almacenamiento → transporte marítimo → mercado internacional. El valor no estaba solamente en criar

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

ovejas, sino en organizar toda esa cadena. La lana podía conservarse, transportarse a largas distancias y venderse en mercados internacionales, lo que vinculaba la economía isleña con la demanda externa. Esa especialización permitió sostener durante décadas una economía exportadora, pero también creó una dependencia muy fuerte respecto del precio mundial de un único producto. Los materiales de tu biblioteca muestran precisamente cómo FIC, tierra y lana quedaron históricamente ligados dentro de un mismo modelo económico.

Esa dependencia comenzó a mostrar sus límites con particular claridad durante la segunda mitad del siglo XX. El Informe Shackleton, elaborado en 1976 para estudiar la situación económica y las posibilidades de desarrollo de las islas, encontró una estructura agraria extremadamente concentrada: existían apenas 36 establecimientos y 27 concentraban aproximadamente el 95 % de la superficie agrícola; la FIC poseía sólo ocho estancias, pero controlaba alrededor del 46 % de la tierra. El informe recomendó ampliar la propiedad local, subdividir establecimientos y aumentar la productividad de la lana mediante mejoras en pasturas y manejo ganadero. También calculó que un aumento del 10 % de la producción lanera podía incorporar alrededor de £150.000 adicionales de ingreso bruto. El punto pedagógico es importante: Shackleton no propuso abandonar inmediatamente la ganadería, sino reformar una economía demasiado concentrada y encontrar nuevas fuentes de desarrollo.

La reforma de la propiedad produjo una transformación profunda de la propia FIC. Green Patch comenzó a subdividirse hacia 1980 y durante la década siguiente la empresa fue desprendiéndose progresivamente de sus grandes establecimientos. En 1991 el gobierno isleño adquirió sus últimas grandes extensiones agrícolas y las integró, junto con otras propiedades, a *Falklands Landholdings*. La FIC dejó así de ser fundamentalmente la gran compañía terrateniente y ovina para convertirse progresivamente en una empresa de servicios. Esta mutación es especialmente interesante para trabajar con estudiantes porque muestra la capacidad de adaptación del capital colonial: la empresa que en el siglo XIX articulaba tierra, ovejas y lana no desapareció cuando perdió gran parte de sus estancias; cambió de negocios y siguió ocupando un lugar relevante en la economía isleña.

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

Hoy la FIC es una subsidiaria íntegramente controlada por FIH Group plc, sociedad constituida en el Reino Unido y cotizada en el mercado AIM de Londres. La empresa está dirigida localmente por Steve Scott, como *Managing Director*, mientras la conducción de FIH Group corresponde a su director ejecutivo Stuart Munro y a un consejo presidido por Nick Henry. A septiembre de 2026, el mayor bloque accionario de FIH era el Article 6 *Marital Trust* vinculado al fideicomiso de Jerry Zucker, con 28,73 %; le seguían Janser Group, con 12,60 %; J. F. C. Watts, con 6,49 %; *Interactive Investor Services*, con 4,82 %; *Fortuna Limited*, con 4,04 %; y Christian Struck, con 3,52 %. La presencia de Fortuna resulta particularmente significativa porque también es uno de los principales actores del sector pesquero isleño, mostrando la existencia de vinculaciones cruzadas entre distintos núcleos de la economía.

La FIC contemporánea conserva una presencia extraordinariamente amplia para la escala de las islas. Opera siete establecimientos minoristas, entre ellos el histórico *West Store*, comercios de electrodomésticos, artículos para el hogar, materiales de construcción, regalos y un establecimiento dentro del complejo militar de Monte Agradable. Su división mayorista abastece empresas, particulares, buques pesqueros e incluso plataformas o embarcaciones vinculadas a actividades *offshore*. La compañía posee además cerca de 400 acres de terrenos con potencial inmobiliario y más de 90 propiedades residenciales destinadas al alquiler a particulares y empresas, incluidos contratistas del Ministerio de Defensa, compañías pesqueras y firmas de servicios petroleros. Desarrolla construcción, venta y alquiler de vehículos, seguros, turismo, agencia marítima, asistencia a cruceros y transporte de cargas entre el Reino Unido y las islas. La empresa dejó de controlar casi la mitad del suelo rural, pero pasó a ocupar numerosos puntos de la cadena cotidiana de circulación de bienes y servicios.

La lana, mientras tanto, no desapareció, aunque perdió la posición económica que había tenido durante más de un siglo. Actualmente existen alrededor de 70 establecimientos agropecuarios, en su mayoría de propiedad familiar, sobre aproximadamente 1,14 millones de hectáreas; el stock total se mantiene cercano al medio millón de ovinos y la producción anual ronda 1,5 millones de kilogramos de lana sucia. La producción busca actualmente mayor valor mediante lanas más finas,

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación
Observatorio Malvinas

trazabilidad y certificaciones ambientales y de bienestar animal. Sin embargo, sigue dependiendo fuertemente del mercado internacional. Falklands Landholdings, que administra parte de las antiguas propiedades concentradas, reconoció para 2023/24 un ingreso estimado por lana de £1,75 millones, equivalente al 75 % de sus ingresos, pero también informó dificultades para vender stocks acumulados y una pérdida de £297.698 en ese ejercicio. Esta comparación permite mostrar al alumno cómo el antiguo sector dominante permanece, pero ya no determina el conjunto de la economía.

El Informe Shackleton de 1976 resulta fundamental porque ya identificaba que el futuro económico no podía limitarse a la lana. En el debate parlamentario británico posterior a su publicación se destacó expresamente el "enorme potencial" de los recursos pesqueros del Atlántico Sur y la ventaja que proporcionaba disponer de las islas como base para explotarlos. Los estudios geológicos dirigidos por D. H. Griffiths durante la década de 1970 se concentraron primordialmente en la geología regional y en las posibilidades del subsuelo, particularmente en relación con los hidrocarburos; por eso conviene no presentar el llamado "Informe Griffiths" como un estudio pesquero. En cambio, Shackleton integró la pesca dentro de una evaluación económica más amplia y señaló su potencial como vía de diversificación. Los materiales de tu biblioteca colocan ambos documentos dentro de una misma secuencia: crisis del modelo lanero, relevamiento científico del espacio marítimo y búsqueda de nuevos recursos explotables.

La verdadera transformación llegó después de 1982. En 1986, el Reino Unido estableció unilateralmente una zona de conservación y administración pesquera en torno de las islas, y desde 1987 comenzó a funcionar un sistema de licencias que permitió capturar fiscalmente una parte del valor de los recursos vivos del mar. El mecanismo evolucionó desde licencias de corto plazo hacia acuerdos de empresas conjuntas y finalmente hacia un régimen de *Individual Transferable Quotas* (ITQ) establecido a partir de la *Fisheries (Conservation and Management) Ordinance* 2005 y aplicado desde 2006. La transformación fue decisiva: en lugar de depender principalmente de una mercancía terrestre cuyo precio se fijaba en mercados externos, la administración isleña comenzó a obtener ingresos significativos por autorizar el acceso a recursos

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

pesqueros, convirtiendo al mar circundante en la principal fuente económica del territorio.

El sistema es relativamente complejo y ofrece un excelente ejercicio para el aula. Existen licencias diferenciadas según especie y modalidad: la A corresponde principalmente a merluzas; la B, al calamar Illex argentinus; las C y X, al calamar patagónico Doryteuthis gahi —denominado localmente Falkland calamari y tradicionalmente Loligo—; la F, a rayas; la W, a peces de aleta restringidos; la G, a combinaciones de Illex y determinadas especies; la L, a merluza negra o Dissostichus eleginoides; y la S, a polaca austral y hoki. Esto demuestra que la "licencia pesquera" no es un permiso genérico: el sistema clasifica especies, zonas, temporadas, buques, esfuerzo y derechos de captura, integrando legislación, ciencia pesquera, administración y vigilancia.

El registro oficial de cuotas individuales transferibles muestra además quiénes poseen derechos sobre las principales pesquerías. Al 1 de enero de 2024 figuraban, entre otras, Argos Group Ltd., Beauchene Fishing Co. Ltd., Bold Ventures Ltd., Consolidated Fisheries Ltd. (CFL), Fortuna Ltd., Pioneer Seafoods Ltd., RBC Ltd., Seafish (Falklands) Ltd., Seaview Ltd., Southern Cross Ltd. y Sullivan Shipping Services Ltd. En la pesquería de Doryteuthis gahi, por ejemplo, Fortuna concentraba 27,53 % de las cuotas de verano y otro 27,53 % de las de invierno; Argos, 18,75 %; Seaview, 14,34 %; Beauchene, 12,97 %; Southern Cross, 11,56 %; RBC, 10,45 %; y Seafish, 4,40 %. Muchas de estas sociedades se articulan con capital, buques, comercialización y mercados extranjeros. El sistema combina así titularidad local de derechos, empresas asociadas, flotas internacionales y comercialización global.

Este régimen ayudó a transformar radicalmente la capacidad fiscal de la administración isleña. En las últimas cuentas nacionales disponibles, correspondientes a 2024, el PBI nominal alcanzó aproximadamente £288 millones, de los cuales £168 millones —58,3 %— correspondieron a pesca y acuicultura. Esa magnitud muestra por qué la rentabilidad del territorio posterior a 1982 no puede entenderse sin el mar. Pero también debe evitarse una simplificación: el valor añadido no queda íntegramente en manos de la población residente. Una parte se convierte en ingresos públicos por licencias y tributos, otra remunera a titulares locales de cuotas, trabajadores y proveedores, y otra se transfiere a empresas,

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

accionistas, tripulaciones y socios comerciales situados fuera de las islas. Los propios documentos de tu biblioteca muestran que las empresas españolas, surcoreanas, taiwanesas y de otros países forman parte de los circuitos comerciales ligados a estas capturas.

La dependencia de la pesca crea, al mismo tiempo, vulnerabilidad económica y ecológica. El caso de Doryteuthis gahi lo demuestra con especial claridad. La segunda temporada de 2023 tuvo que terminar antes de tiempo debido al deterioro de los indicadores biológicos, y en 2024 la segunda temporada directamente no fue abierta, después de que los relevamientos determinaran una biomasa insuficiente para garantizar el umbral de conservación establecido. En la primera temporada de 2025 se capturaron 37.592 toneladas y la temporada debió cerrarse seis días antes ante la presencia de ejemplares pequeños; tanto la captura total como la captura por unidad de esfuerzo fueron las más bajas de las cinco primeras temporadas anteriores, aunque todavía se situaron por encima del promedio de largo plazo. La segunda temporada de 2025 produjo 18.454 toneladas, aproximadamente 20 % por debajo del promedio histórico tanto en captura como en rendimiento.

Para el docente, estos episodios permiten introducir una cuestión central: una actividad extractiva sólo puede sostener la renta si consigue sostener también el recurso. El calamar es una especie de ciclo de vida corto y fuertes variaciones interanuales; por eso no sería riguroso atribuir cada caída de biomasa exclusivamente a “sobrepesca”. Temperatura oceánica, alimentación, reproducción, mortalidad natural, condiciones ambientales y presión pesquera pueden interactuar. Precisamente por esa incertidumbre, el sistema utiliza campañas científicas, estimaciones de biomasa, límites de esfuerzo, cierres espaciales y cierres anticipados de temporada. En 2025, por ejemplo, determinadas cuadrículas fueron cerradas ante la detección de ejemplares pequeños y el final de temporada se adelantó. Esto ofrece una oportunidad pedagógica particularmente buena para distinguir explotación, sobreexplotación, variabilidad natural y manejo precautorio, evitando conclusiones simplistas.

La dimensión ecológica es más amplia que la biomasa comercial. La pesca industrial puede producir captura incidental, interacción con mamíferos y aves marinas, alteraciones del fondo por artes de arrastre y

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

presión sobre redes tróficas. Por eso la administración utiliza observadores, dispositivos de exclusión de pinnípedos y evaluaciones científicas. En la segunda temporada de Doryteuthis de 2025 se exigió que parte de la flota embarcara observadores específicos de mamíferos marinos y que utilizara dispositivos de exclusión de focas. Para la Argentina, además, existe una dimensión jurídica adicional: la explotación unilateral de recursos renovables en áreas comprendidas por la controversia de soberanía ha sido reiteradamente objetada y vinculada con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que exhortó a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continuara el proceso recomendado por las resoluciones de la ONU.

La conservación ha adquirido, por ello, creciente importancia institucional. En 2026 existían 19 reservas naturales oficiales distribuidas por el archipiélago y una red adicional de santuarios y reservas privadas; en septiembre de 2025 se había añadido también un parque nacional. Paralelamente se elaboró una política de *Marine Managed Areas*, que propone reservas marinas nacionales en sectores como las islas Jason, Bird Island, Beauchene, Kidney/Cochon y el Banco Burdwood, junto con zonas marinas de uso sostenible costeras y oceánicas. Para el aula resulta particularmente interesante confrontar dos cuestiones que no deben presentarse como necesariamente contradictorias pero sí como potencialmente tensas: ¿cómo puede una administración basar gran parte de su economía en la extracción de recursos marinos y, al mismo tiempo, presentarse como responsable de su conservación? ¿Qué instrumentos permiten evaluar si ambas políticas son compatibles?

Esa tensión aparece nuevamente con la salmocultura, uno de los debates económicos y ambientales más importantes de 2026. La administración isleña todavía no ha autorizado una industria salmonera comercial de gran escala: actualmente desarrolla una consulta pública que permanecerá abierta hasta el 30 de octubre de 2026. Los estudios encargados abarcan impacto ambiental, capacidad de carga, legislación comparada y efectos socioeconómicos. El proyecto utilizado como caso de referencia procede de *Unity Marine*, sociedad vinculada a Fortuna y al grupo danés F-Land. Según la propuesta difundida durante el debate público, una explotación de gran escala podría alcanzar decenas de miles

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación
Observatorio Malvinas

de toneladas anuales; un escenario de 30.000 toneladas fue estimado en alrededor de £35 millones anuales de actividad económica y 133 empleos. No deben presentarse esas cifras como resultados garantizados: forman parte de modelos prospectivos sometidos precisamente a discusión pública.

Las objeciones ambientales a la salmonicultura permiten ampliar todavía más el problema. Entre los riesgos considerados en los estudios y consultas aparecen la acumulación de nutrientes y residuos orgánicos bajo las jaulas, enfermedades y parásitos, utilización de medicamentos, escapes de peces, interacción con fauna marina, consumo de oxígeno, impactos sobre kelp y zonas costeras y posibles efectos sobre especies comerciales. La propia consulta oficial reconoce que estos impactos necesitan evaluarse y que el marco normativo tendría que ser modificado si finalmente se autorizara una industria de escala significativa. El debate enfrenta potenciales ingresos, empleos y diversificación económica con el riesgo de alterar ecosistemas que, a su vez, sustentan pesca, turismo y biodiversidad. Es una excelente oportunidad para que los estudiantes comprendan que economía y ambiente no constituyen dimensiones independientes.

Desde la perspectiva de la Cuestión Malvinas, todo este recorrido permite comprender por qué la rentabilidad económica es una dimensión del sostenimiento material del enclave. Durante el siglo XIX la lana hizo posible una economía exportadora y consolidó grandes propiedades; cuando ese modelo entró en crisis, la reforma territorial y el desarrollo pesquero permitieron construir una fuente de renta mucho más importante. La FIC acompañó esa transformación pasando de gran terrateniente a empresa diversificada de servicios; el gobierno local pasó de una base fiscal limitada a administrar licencias y cuotas sobre recursos marítimos; y la economía actual se encuentra estrechamente conectada con capitales, flotas y mercados internacionales. Desde la posición argentina, la cuestión central consiste en que buena parte de esa estructura económica se desarrolla sobre recursos y espacios cuya soberanía permanece controvertida y cuya explotación unilateral es objetada por nuestro país. Desde la perspectiva británica e isleña, en cambio, esas actividades son presentadas como ejercicio legítimo de administración, desarrollo económico y manejo sustentable.

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación
Observatorio Malvinas

Para el aula resulta especialmente productivo evitar que esta historia se convierta en una sucesión de empresas y cifras. Puede organizarse mediante una línea de transformación económica: 1846, Lafone y la apropiación empresarial de grandes extensiones; 1851-1852, nacimiento y Carta Real de la FIC; segunda mitad del siglo XIX, consolidación de la lana; década de 1970, crisis del modelo y estudios Griffiths-Shackleton; 1980-1991, subdivisión y transferencia de las grandes estancias; 1986-1987, creación del régimen pesquero; 2005-2006, establecimiento de las cuotas transferibles; 2023-2025, crisis de determinadas temporadas de Doryteuthis; 2026, debate sobre salmocultura. Cada momento puede analizarse respondiendo siempre las mismas preguntas: qué recurso está en juego, quién controla su acceso, qué empresa participa, dónde se realiza la ganancia, qué infraestructura requiere y qué consecuencias ambientales produce.

En nivel primario, el docente puede construir tres cadenas visuales: lana, pesca y salmonicultura. Para la lana: oveja, esquila, fardo, barco y mercado; para la pesca: calamar, barco, licencia, captura, puerto y venta; para la salmonicultura: jaula, pez, alimento, producción, mercado y ambiente. El objetivo es que los estudiantes descubran qué elementos necesita cada actividad y qué diferencias existen entre extraer un recurso silvestre y criar una especie. En nivel secundario, puede utilizarse el registro de cuotas para transformar porcentajes en un gráfico de concentración empresarial; comparar capturas de Doryteuthis entre 2023, 2024 y 2025; confrontar el peso económico de la pesca con la lana; y analizar documentos favorables y críticos sobre salmonicultura. El ejercicio final puede formularse mediante una pregunta sencilla pero estructural: ¿qué ocurrió para que un territorio históricamente dependiente de la lana pasara a sostener una economía de muy alto PBI per cápita sobre los recursos del mar?

La respuesta conduce al núcleo conceptual del capítulo. No cambiaron solamente los recursos: cambió la forma de organizar su explotación. La FIC del siglo XIX combinó propiedad territorial, ganadería, comercio y transporte; el sistema pesquero contemporáneo combina conocimiento científico, licencias, cuotas, empresas, buques, vigilancia y mercados internacionales; la posible salmonicultura añadiría inversión, tecnología, regulación ambiental y nuevas infraestructuras costeras. Entre Lafone y

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

las discusiones de 2026 existe, por lo tanto, una larga historia de adaptación económica. Para enseñar Malvinas con profundidad, el docente debe poder mostrar esa continuidad y esas rupturas: de la tierra al mar, de la propiedad al derecho de explotación, de la lana a la renta pesquera y de la empresa colonial tradicional a una red contemporánea de compañías, capitales, regulación y recursos estratégicos.

Por otro lado, la cuestión hidrocarburífera debe situarse bastante antes del descubrimiento de *Sea Lion*. Durante las décadas de 1970 y 1980 se realizaron estudios académicos y geológicos sobre las cuencas sedimentarias del Atlántico Sur; la propia administración británica registra perforaciones científicas en el Maurice Ewing Bank y campañas sísmicas desde 1977. Estos antecedentes deben relacionarse con el Informe Griffiths y, sobre todo, con el Informe Shackleton de 1976, que contribuyeron a modificar la percepción económica del archipiélago: frente al agotamiento relativo del modelo lanero, el valor potencial debía buscarse crecientemente en el mar, el subsuelo y los recursos de los espacios circundantes. La cuestión adquiría además una particular sensibilidad jurídica: el 1 de diciembre de 1976, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 31/49, que instó a Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que introdujeran modificaciones unilaterales en la situación mientras continuara el proceso recomendado para resolver la disputa. Por ello, el posterior desarrollo petrolero no puede explicarse solamente como una historia empresarial: se desarrolla dentro de una controversia internacional de soberanía todavía pendiente.

Un antecedente indispensable —y especialmente útil para una lectura crítica— es la Declaración Conjunta argentino-británica del 27 de septiembre de 1995 sobre cooperación en actividades costa afuera, celebrada durante las presidencias de Carlos Menem bajo una fórmula que preservaba las respectivas posiciones de soberanía. El entendimiento pretendía establecer mecanismos de cooperación para la exploración y explotación de hidrocarburos, pero nació acompañado por interpretaciones profundamente divergentes. La Argentina entendía que la cooperación debía proyectarse sobre las áreas marítimas del Atlántico Sudoccidental sujetas a la disputa, estimadas en aproximadamente 430.000 km^2; el Reino Unido sostuvo una interpretación mucho más

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

restrictiva de la cooperación efectiva, concentrada en un Área de Cooperación Especial de aproximadamente 21.000 km², mientras mantenía la posibilidad de desarrollar actividades en otras zonas. La contradicción quedó rápidamente expuesta: a comienzos de octubre de 1995, pocos días después de firmada la Declaración, las autoridades británicas impulsaron unilateralmente una licitación petrolera en el área disputada, inmediatamente protestada por la Argentina. En 1996 fueron adjudicadas siete licencias a catorce compañías sobre 48 bloques — unos 12.800 km² — de la Cuenca Malvinas Norte, y en 1998 la plataforma Borgny Dolphin perforó seis pozos. El episodio muestra los límites del *without prejudice*: la reserva jurídica de soberanía impedía que la cooperación significara una renuncia formal, pero no impidió que una de las partes generara nuevos hechos económicos sobre el espacio disputado.

Precisamente por esas divergencias, la experiencia cooperativa terminó fracasando. La Comisión de Hidrocarburos del Atlántico Sudoccidental, creada por el entendimiento de 1995, celebró su última reunión en julio de 2000 y entró posteriormente en una "pausa de reflexión". Finalmente, el 27 de marzo de 2007, la Argentina dio por terminada la Declaración Conjunta. La fundamentación argentina resulta central para comprender el conflicto: sostuvo que el Reino Unido había convertido una fórmula concebida para administrar provisoriamente una controversia en un marco dentro del cual continuaban desarrollándose actividades unilaterales, sin que Argentina participara efectivamente de la exploración y explotación ni se avanzara paralelamente en la negociación de soberanía. El problema adquirió todavía mayor entidad en 2010, cuando comenzó una nueva campaña de perforación con la plataforma Ocean Guardian y Rockhopper Exploration descubrió Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Buenos Aires presentó entonces una protesta formal ante Londres, rechazando la competencia británica para autorizar esas actividades. Desde la perspectiva argentina, por consiguiente, la controversia no se refiere únicamente a quién obtiene los beneficios del petróleo: comienza por una cuestión anterior, quién posee título jurídico para otorgar la licencia que hace posible su extracción.

La respuesta argentina pasó entonces de la protesta diplomática a la construcción de un régimen jurídico interno de disuasión. La Ley 26.659

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

de 2011, endurecida mediante la Ley 26.915 de 2013, estableció que la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina requieren autorización de la autoridad argentina competente y previó sanciones contra quienes desarrollen esas actividades sin habilitación. Sobre esa base fueron declaradas ilegales o clandestinas e inhabilitadas distintas compañías que participaron sucesivamente de la exploración, entre ellas Rockhopper Exploration, Falkland Oil & Gas, Borders & Southern Petroleum, Argos Resources, Desire Petroleum, Premier Oil, Noble Energy y, posteriormente, Navitas Petroleum. La secuencia empresarial muestra, al mismo tiempo, una característica importante del proyecto: durante más de una década el descubrimiento de petróleo no fue equivalente a su explotación comercial. Los elevados costos del *offshore*, las oscilaciones del precio internacional, las dificultades financieras y los sucesivos cambios de socios retrasaron el desarrollo. *Premier Oil* ingresó como operador en 2012; después de diferentes reorganizaciones empresariales, Navitas Petroleum asumió en 2022 la posición operadora y actualmente controla el 65 % de *Sea Lion*, mientras Rockhopper conserva el 35 %. En 2025 ambas empresas alcanzaron finalmente la decisión de inversión y recibieron de la administración isleña la aprobación para desarrollar y producir en el yacimiento.

El paso de Sea Lion de descubrimiento a proyecto de explotación constituye, por ello, un cambio cualitativo. Ya no se trata solamente de realizar estudios sísmicos o perforaciones exploratorias, sino de instalar una infraestructura destinada a producir hidrocarburos durante décadas. Esto explica la crítica argentina contemporánea: una explotación prolongada puede generar inversiones hundidas, infraestructura, empleo, contratos, ingresos fiscales y una red de intereses empresariales internacionales vinculados materialmente con la continuidad del régimen existente. Argentina considera esas actividades incompatibles con la Resolución 31/49 y sostiene que las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas/isleñas carecen de validez respecto de los derechos soberanos argentinos; el Reino Unido y la administración de las islas, por el contrario, sostienen su competencia para otorgarlas. Para el docente, ésta es la clave crítica que permite conectar hidrocarburos con el resto del capítulo: la lana necesitó apropiación y concentración de

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación
Observatorio Malvinas

tierras; la pesca transformó derechos de acceso al mar en licencias y renta; el petróleo procura transformar autorizaciones unilaterales sobre el subsuelo marítimo en inversiones de muy largo plazo. El problema de fondo no es sólo económico. Es la relación entre recurso, jurisdicción, empresas, capital, hechos consumados y soberanía.

III.Del conflicto de 1982 a Monte Agradable

El conflicto armado de 1982 constituye un punto de inflexión fundamental para comprender la configuración contemporánea de la Cuestión Malvinas. Antes de la guerra, la presencia militar británica en las islas era reducida y descansaba sobre una infraestructura limitada, particularmente si se la compara con el dispositivo construido después del conflicto. La campaña reveló a Londres las dificultades extraordinarias que implicaba proyectar y sostener una fuerza militar a casi 13.000 kilómetros del territorio metropolitano: extensas líneas de abastecimiento, dependencia del transporte marítimo, necesidad de escalas intermedias, restricciones aeroportuarias y enormes exigencias para mantener hombres, combustible, municiones, repuestos y equipos en un ambiente austral. La historiografía británica sobre la guerra concede una importancia decisiva a esas dificultades. Terminada la guerra, el Reino Unido extrajo una conclusión estratégica: la defensa de las islas no podía volver a depender de la organización de una fuerza expedicionaria enviada desde Europa una vez desencadenada una crisis.

La respuesta inmediata fue un incremento considerable de las fuerzas desplegadas en las islas, pero el cambio verdaderamente importante fue doctrinario. Londres procuró sustituir el modelo de "recuperación" empleado en 1982 por un modelo de "disuasión y refuerzo": disponer permanentemente de fuerzas suficientes para impedir o dificultar cualquier operación sobre el archipiélago y, simultáneamente, contar con infraestructura capaz de recibir rápidamente refuerzos procedentes del Reino Unido. La distancia geográfica no desaparecía, pero podía ser parcialmente neutralizada mediante aeródromos, depósitos, comunicaciones, vigilancia, transporte estratégico y fuerzas preposicionadas. En términos militares, se trataba de trasladar al Atlántico Sur una parte de las capacidades que en 1982 habían debido improvisarse a lo largo de una cadena logística que tuvo en la isla

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

Ascensión uno de sus puntos fundamentales. El dispositivo posterior a la guerra comenzó así a transformar las Malvinas de una posesión colonial escasamente defendida en una posición militar permanente.

La expresión material más importante de esa transformación fue la construcción del *Mount Pleasant Complex* (MPC), Monte Agradable, situado aproximadamente a cincuenta kilómetros de Puerto Argentino. La instalación fue inaugurada oficialmente el 12 de mayo de 1985 y alcanzó posteriormente su plena capacidad operacional. No se trataba simplemente de construir un nuevo aeropuerto. Monte Agradable fue concebido como un complejo militar conjunto, capaz de integrar operaciones aéreas, fuerzas terrestres, logística, comunicaciones, vigilancia y enlace con el componente naval. La base dispone de una pista principal de aproximadamente 2.600 metros, una segunda pista, hangares, depósitos de combustible y materiales, instalaciones de mantenimiento, alojamiento para el personal y capacidad para operar aeronaves de transporte de gran porte. La propia documentación de la Royal Air Force explica que su apertura permitió establecer una presencia permanente de cazas y aeronaves de transporte en las islas. Esta definición resulta particularmente significativa: la finalidad de Monte Agradable no consiste únicamente en alojar los medios existentes, sino en hacer posible su permanencia y permitir su rápido incremento en una situación de crisis.

Aquí reside una de las principales lecciones estratégicas de 1982. Una base militar no debe medirse exclusivamente por el número de soldados o aeronaves que alberga cotidianamente, sino por la cantidad y calidad de fuerzas que puede recibir, abastecer, mantener y proyectar. Monte Agradable funciona, en ese sentido, como un multiplicador de fuerza. El Reino Unido no necesita mantener permanentemente en las islas una fuerza equivalente a la enviada en 1982: necesita conservar una guarnición inicial suficientemente preparada y una infraestructura desde la cual puedan operar los refuerzos. Hay que considerar que la nueva posición británica debía permitir que la guarnición pudiera ser reforzada con rapidez por vía aérea. El problema logístico no desapareció; fue reorganizado. Si en 1982 Londres debió llevar buena parte de su infraestructura hacia el teatro de operaciones, después de 1985 comenzó a disponer de ella dentro del propio teatro.

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación
Observatorio Malvinas

El instrumento central de esa transformación es el denominado *air bridge*, el puente aéreo que vincula al Reino Unido con el Atlántico Sur. Históricamente, la isla Ascensión desempeñó un papel fundamental como escala intermedia y plataforma logística, algo que la experiencia de 1982 había demostrado con extraordinaria claridad. Monte Agradable permitió cerrar el otro extremo de ese corredor mediante una base capaz de recibir aeronaves de transporte estratégico y distribuir desde allí personal, suministros y equipos. De este modo, el dispositivo británico dejó de depender exclusivamente de la lenta proyección marítima de una fuerza desde Europa. El transporte naval continúa siendo indispensable para determinados volúmenes de carga, pero el puente aéreo proporciona una capacidad de reacción incomparablemente más rápida. El complejo se convirtió así en el nodo que conecta las islas con una red logística mucho más extensa y permite transformar capacidad militar situada fuera del Atlántico Sur en fuerza potencialmente disponible dentro del teatro.

Sobre esa infraestructura descansa actualmente el componente aéreo de la guarnición. La *Royal Air Force* mantiene en Monte Agradable al No. 1435 Flight, equipado con cuatro Eurofighter Typhoon FGR4, cuya misión fundamental es proporcionar capacidad permanente de defensa aérea. Junto con ellos opera el No. 1312 Flight, asociado a capacidades de transporte, reabastecimiento y apoyo mediante aeronaves como el Voyager y el Atlas C1/A400M. Considerar solamente los cuatro Typhoon conduciría, sin embargo, a una lectura incompleta del dispositivo. Su capacidad depende de un sistema compuesto por radares, comunicaciones, mantenimiento, combustible, armamento, personal técnico, alerta temprana y posibilidad de recibir refuerzos. El verdadero poder militar de Monte Agradable se encuentra, por consiguiente, en la integración sistémica de esos elementos, no en la suma aislada de plataformas desplegadas en un momento determinado.

A ello se agrega una defensa aérea terrestre que también experimentó un proceso de modernización. Durante décadas el sistema Rapier constituyó uno de los elementos característicos de la protección del archipiélago. Su reemplazo por Sky Sabre, basado en el misil CAMM, significó un salto tecnológico considerable. Integrado con radares como el Saab Giraffe y con sistemas modernos de mando y control, el nuevo

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

dispositivo amplía la capacidad de detección, seguimiento y respuesta frente a amenazas aéreas. Combinado con los Typhoon, configura una defensa escalonada en la cual sensores, cazas, misiles tierra-aire y comunicaciones actúan como partes de un mismo sistema. La importancia de este proceso excede nuevamente la incorporación de un arma determinada: demuestra que Londres continúa actualizando la infraestructura militar construida después de 1982 en lugar de conservarla como una herencia estática de la guerra.

El componente terrestre responde a la misma lógica. La presencia británica comprende una compañía de infantería en rotación y distintas unidades y especialistas destinados a protección, apoyo, comunicaciones, ingeniería y funcionamiento de la base. No se trata de constituir en las islas un gran ejército permanente, sino de mantener una guarnición conjunta capaz de asegurar el territorio, proteger las instalaciones esenciales y proporcionar el núcleo inicial sobre el cual puedan incorporarse fuerzas adicionales. La dimensión del despliegue cotidiano debe analizarse, por ello, conjuntamente con la infraestructura disponible. Una fuerza relativamente pequeña respaldada por aeródromos, depósitos, comunicaciones, sistemas de defensa aérea y transporte estratégico posee una capacidad muy diferente de una fuerza numéricamente semejante aislada de esos medios. Esta es precisamente una de las diferencias estructurales entre la situación existente en vísperas de abril de 1982 y la creada posteriormente.

El dispositivo se completa sobre el mar. La presencia naval británica en el Atlántico Sur cumple funciones de patrullaje, vigilancia, presencia y protección de los territorios ocupados, pero su relación con Monte Agradable debe entenderse dentro de una arquitectura conjunta. Particular importancia adquiere *Mare Harbour*, en *East Cove*, que funciona como instalación portuaria militar vinculada al complejo. Si Monte Agradable permite recibir rápidamente personal y determinadas cargas por vía aérea, *Mare Harbour* proporciona el acceso marítimo necesario para materiales, vehículos, equipos y abastecimientos cuya naturaleza o volumen requieren transporte naval. Aeródromo y puerto constituyen, por tanto, partes complementarias de una misma estructura logística. La capacidad militar británica en las islas no se explica solamente por las unidades presentes, sino por la existencia de una red.

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

La militarización posterior a 1982 produjo además una transformación territorial. Antes de la guerra, Puerto Argentino concentraba buena parte de las funciones políticas, económicas y de comunicaciones del archipiélago. La construcción de Monte Agradable creó un segundo polo, específicamente militar, conectado con instalaciones portuarias, carreteras, comunicaciones y servicios. El territorio ocupado comenzó así a organizarse también en función de las necesidades de defensa. Esta circunstancia es relevante porque demuestra que la presencia militar no constituye un elemento exterior añadido al asentamiento británico, sino una de las estructuras que organizan materialmente el espacio insular. Transporte, infraestructura, comunicaciones y logística civil y militar aparecen parcialmente entrelazados en un territorio cuya escala demográfica es extraordinariamente pequeña en comparación con la magnitud de las instalaciones de defensa.

Desde la perspectiva argentina, esa transformación obliga a evitar dos simplificaciones. La primera consiste en describir Monte Agradable únicamente como una "base aérea". La segunda, en medir la militarización exclusivamente a partir del número de efectivos británicos desplegados. Monte Agradable es ante todo infraestructura de proyección y sostenimiento de poder. Su relevancia reside en permitir vigilancia permanente, defensa aérea, transporte estratégico, recepción de refuerzos, mantenimiento de aeronaves, almacenamiento de suministros y articulación con las fuerzas terrestres y navales. El dispositivo permite a Londres mantener una presencia permanente relativamente contenida y, al mismo tiempo, conservar la posibilidad de aumentar sustancialmente sus capacidades si la situación estratégica lo exigiera. Esa combinación entre presencia, tecnología, infraestructura y capacidad de refuerzo constituye el núcleo del sistema construido después de 1982.

Existe, finalmente, una dimensión geopolítica que excede la defensa inmediata de las islas. Monte Agradable se encuentra en un espacio donde confluyen el Atlántico Sur, las rutas hacia los océanos Pacífico e Índico, las Georgias del Sur y Sandwich del Sur y la proyección hacia el continente antártico. La propia planificación británica contemporánea vincula la postura defensiva en Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur con una arquitectura más amplia de presencia en los territorios

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

de ultramar y con los intereses británicos en el sistema antártico. Por eso resulta insuficiente interpretar la base exclusivamente a partir de una hipótesis de conflicto bilateral argentino-británica. Para Londres, las instalaciones del Atlántico Sur forman parte de una red internacional de posiciones, accesos y capacidades logísticas que sostienen su condición de potencia con proyección global. La *Strategic Defence Review* británica de 2025 continúa expresamente la política de mantener una postura militar defensiva en estos territorios.

La secuencia histórica resulta, entonces, clara. 1982 reveló una vulnerabilidad; Monte Agradable fue construido para corregirla. Durante la guerra, el Reino Unido debió proyectar desde miles de kilómetros una fuerza expedicionaria, sostener una extensa cadena logística y operar sobre un territorio situado en uno de los extremos de esa cadena. Después de la guerra procuró invertir esa ecuación: disponer en las propias islas de una guarnición permanente, superioridad aérea local, sistemas de vigilancia y defensa, infraestructura portuaria, depósitos, comunicaciones y un aeródromo capaz de recibir rápidamente fuerzas procedentes del exterior. La transformación no consistió simplemente en aumentar el número de soldados, sino en convertir las islas ocupadas en una plataforma militar permanente y reforzable. La principal enseñanza estratégica es que la geografía permanece, pero su significado puede modificarse mediante infraestructura, logística y tecnología: la distancia que en 1982 constituyó una vulnerabilidad británica fue parcialmente compensada mediante la construcción de capacidades permanentes de sostenimiento y refuerzo.

Para trabajar esta cuestión en el aula, resulta útil desplazar la atención desde la simple enumeración de armas y efectivos hacia las preguntas que permiten leer estratégicamente un territorio: ¿de dónde llegan los hombres, el combustible, las municiones y los repuestos?, ¿qué función cumplen conjuntamente aeródromos, puertos, radares, depósitos y comunicaciones?, ¿qué papel desempeñan Ascensión y el puente aéreo?, ¿qué relación existe entre Malvinas, los restantes espacios insulares, los pasos interoceánicos y la Antártida? Un mapa y la comparación entre el dispositivo existente en abril de 1982 y el construido posteriormente permiten comprender que el poder sobre un espacio no depende solamente de ocuparlo, sino de poseer las capacidades necesarias para

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

llegar, observar, comunicar, abastecer, permanecer y reforzar. Monte Agradable ofrece así una herramienta pedagógica para interrogar también el propio espacio argentino: identificar nuestras distancias, puertos, aeródromos, rutas marítimas, capacidades logísticas y puntos estratégicos permite discutir en clase qué significa, materialmente, sostener una presencia efectiva y permanente en el Atlántico Sur y la Antártida.

IV. De la colonización administrada a la construcción de una población

La ocupación de un territorio no se sostiene solamente mediante fuerzas militares, infraestructura o capacidad logística. Requiere también una población que lo habite, trabaje, organice instituciones y reproduzca en el tiempo una determinada comunidad política. Por eso, junto con la dimensión militar analizada anteriormente, resulta necesario incorporar una dimensión demográfica y biopolítica del enclave en Malvinas. La palabra biopolítica puede parecer inicialmente compleja, pero expresa una idea relativamente sencilla: existen decisiones de poder que actúan sobre la vida de una población, regulando quién puede ingresar a un territorio, quién puede trabajar, quién puede permanecer, quién accede a determinados derechos y, finalmente, quién puede formar parte de la comunidad política. En Malvinas esta cuestión posee una relevancia particular porque se trata de un territorio extenso, insular y escasamente poblado, en el que pequeñas modificaciones migratorias pueden producir efectos importantes sobre la estructura económica, social y electoral.

El punto de partida es necesariamente histórico. Después de la ocupación británica de 1833, el poblamiento de las islas no fue consecuencia de una migración espontánea y masiva, sino de un proceso gradual vinculado con la consolidación de la administración colonial. La creación de Puerto Stanley como capital en 1845, el desarrollo de la *Falkland Islands Company* (FIC) desde 1851 y la expansión de la economía ovina proporcionaron las condiciones materiales para incorporar colonos, funcionarios, trabajadores rurales y personas vinculadas con la navegación y la logística imperial. Durante décadas, la población permaneció reducida y estrechamente relacionada con las actividades económicas y administrativas desarrolladas bajo autoridad británica. Sobre esa estructura fue conformándose progresivamente una

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

comunidad insular diferenciada. La población debe estudiarse, por tanto, conjuntamente con la economía, la propiedad de la tierra, el trabajo y las instituciones que organizaron la ocupación.

Con el paso del tiempo, aquella población fue desarrollando características culturales e identitarias propias, pero dentro de un marco institucional predominantemente británico. La educación, el idioma, la administración pública, los símbolos, las comunicaciones y los vínculos económicos contribuyeron a construir una identidad insular estrechamente relacionada con el Reino Unido y progresivamente diferenciada del espacio sudamericano. Este aspecto es importante porque permite comprender que las identidades colectivas poseen una historia: no aparecen terminadas ni permanecen invariables, sino que se forman mediante instituciones, prácticas sociales, experiencias compartidas y representaciones del pasado. El propio proceso histórico estudiado en el trabajo sobre la dimensión biopolítica muestra la articulación entre dispositivos educativos, administrativos, lingüísticos y culturales y la progresiva construcción de la categoría política de *Falkland Islanders*.

Esta perspectiva histórica adquiere especial importancia cuando se observa la composición demográfica contemporánea. El *Falkland Islands Census* 2021, último censo general disponible, calculó una población habitual de aproximadamente 3.662 personas, cifra que descendía a alrededor de 3.328 habitantes cuando se excluía la población vinculada a Mount Pleasant. Entre los residentes considerados por lugar de nacimiento, 1.530 habían nacido en las islas y 1.898 fuera de ellas. Estos números permiten advertir una característica estructural: la reproducción de la población no depende únicamente del crecimiento natural. La inmigración constituye un elemento fundamental para cubrir las necesidades laborales, incorporar población económicamente activa y mantener actividades que una comunidad de dimensiones tan reducidas difícilmente podría sostener exclusivamente con habitantes nacidos en el archipiélago.

La composición de esa inmigración también permite trabajar una cuestión particularmente interesante. Entre quienes habitan las islas existen personas nacidas en el Reino Unido, Santa Elena, Chile, Filipinas y otros lugares. Esto significa que la economía necesita incorporar

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación
Observatorio Malvinas

trabajadores procedentes del exterior. La población efectivamente necesaria para hacer funcionar el territorio es, por consiguiente, más diversa que la imagen de una comunidad exclusivamente formada por familias históricamente asentadas en las islas. La inmigración no constituye aquí un fenómeno marginal, sino una variable económica y demográfica estructural. En una población de pocos miles de habitantes, la llegada o partida de algunos centenares de trabajadores posee una incidencia proporcional que sería prácticamente imperceptible en una gran sociedad continental.

Pero trabajar, residir y pertenecer políticamente no significan lo mismo. Éste es uno de los puntos centrales para comprender la dimensión biopolítica. El régimen vigente distingue entre visitantes, trabajadores temporales, dependientes, residentes, residentes permanentes y otras categorías jurídicas, hasta llegar al denominado *Falkland Islands Status*. Cada situación proporciona diferentes posibilidades de ingreso, permanencia, trabajo y participación. La pertenencia política no deriva automáticamente del hecho de vivir o trabajar durante determinado tiempo en las islas, sino que se encuentra jurídicamente organizada. El censo de 2021 mostraba claramente esa estratificación: registraba 2.089 titulares del *Falkland Islands Status*, 770 titulares de *Work Permits* y 331 de *Permanent Residence Permits*.

Puede pensarse entonces una secuencia particularmente útil para comprender el funcionamiento de este sistema: entrar → trabajar → residir → permanecer → pertenecer. Una persona puede ser necesaria para la economía sin convertirse inmediatamente en integrante pleno de la comunidad política. Precisamente allí aparece la utilidad de la categoría de biopolítica: permite observar cómo las normas migratorias y de residencia administran distintos grados de incorporación al territorio. La legislación determina bajo qué condiciones una persona puede entrar, cuánto tiempo puede permanecer, qué actividades puede realizar y mediante qué procedimientos puede alcanzar una situación jurídica más estable. Los instrumentos migratorios dejan así de aparecer como simples trámites administrativos y pueden estudiarse como mecanismos que intervienen sobre la composición presente y futura de la población. De esto forma vemos que estos regímenes funcionan como dispositivos de preservación demográfica e identitaria del enclave.

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

Esta cuestión adquiere una significación adicional debido al lugar que el Reino Unido concede a la autodeterminación dentro de su argumentación sobre Malvinas. Si la voluntad de los habitantes constituye uno de los argumentos centrales de la posición británica, resulta legítimo formular una pregunta anterior: ¿cómo se constituyó históricamente esa población y mediante qué reglas se determina actualmente quién forma parte de ella? La pregunta no implica negar la existencia actual de una comunidad humana con vínculos, identidades y derechos individuales, sino distinguir esa realidad de la controversia internacional de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. Para estudiar críticamente el argumento británico resulta necesario observar simultáneamente el proceso histórico de poblamiento y las instituciones contemporáneas que regulan migración, residencia y pertenencia política.

Aquí aparece, además, una conexión fundamental con el capítulo anterior. Monte Agradable y la regulación demográfica representan dos formas diferentes de sostener materialmente el mismo territorio. La primera permite observar cómo se garantiza defensa, vigilancia, abastecimiento y capacidad de refuerzo; la segunda permite analizar cómo se asegura población, fuerza de trabajo y continuidad social. Incluso estadísticamente existe una diferenciación significativa entre la pequeña sociedad civil y la población vinculada al complejo militar. El dispositivo británico puede pensarse entonces mediante dos circuitos complementarios: una población civil cuya reproducción económica y demográfica depende parcialmente de la inmigración y una estructura militar cuya capacidad material depende directamente del Reino Unido. Comprender esta relación evita estudiar separadamente población, economía y defensa: las tres dimensiones forman parte de las condiciones materiales necesarias para sostener una presencia permanente.

Como cierre, puede proponerse a los estudiantes una pregunta inicial: ¿quiénes habitan las islas y quiénes, dentro de esa población, integran efectivamente la comunidad política? El Censo de 2021 registró 3.662 residentes habituales, pero esa población no constituye un conjunto homogéneo: una proporción significativa nació fuera del archipiélago y comprende trabajadores sujetos a diferentes regímenes migratorios y de residencia. La comparación entre habitantes, titulares de permisos

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

laborales, residentes permanentes y poseedores del *Falkland Islands Status* permite advertir una primera distinción fundamental: población, fuerza de trabajo y cuerpo político no son categorías equivalentes.

Esta diferenciación permite introducir la dimensión biopolítica mediante cinco acciones: ingresar, trabajar, residir, permanecer y pertenecer. Las regulaciones migratorias y laborales determinan quién puede acceder al territorio y desarrollar actividades económicas, mientras que los regímenes de residencia y status establecen condiciones diferentes para la permanencia y la incorporación política. En este sentido preciso puede discutirse críticamente la categoría de etnoestado: no como descripción de una sociedad étnicamente homogénea, que los propios datos demográficos desmienten, sino como interrogante sobre un sistema institucional que selecciona y reproduce una comunidad histórica e identitaria determinada. El demos resulta así más restringido que la totalidad de quienes efectivamente viven y trabajan en las islas.

La pregunta siguiente es entonces quién posee derechos políticos. El *Falkland Islands Status* ocupa un lugar central en la delimitación de la pertenencia local y se encuentra relacionado con el acceso al registro electoral y al ejercicio de derechos políticos; en este sentido, padrones recientes muestran aproximadamente 1.500 a 1.800 electores. Esto permite formular una cuestión pedagógica especialmente relevante: si una parte de los habitantes puede trabajar y residir sin integrar en iguales condiciones el cuerpo electoral, ¿quién constituye jurídicamente el "pueblo" cuya voluntad política se invoca? La pregunta obliga a estudiar conjuntamente demografía, migración, trabajo, ciudadanía y derechos políticos, en lugar de considerar a la población como una realidad natural anterior al orden jurídico.

Finalmente, esta cuestión debe relacionarse con la controversia de soberanía. La Constitución de 2009 incorporó expresamente el principio de libre determinación, que el Reino Unido utiliza para fundamentar la pretensión de que los habitantes decidan el estatuto político de las islas. Sin embargo, el tratamiento de la Cuestión Malvinas en las Naciones Unidas posee una particularidad decisiva: la Resolución 2065 (XX) reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y estableció que su solución debía alcanzarse mediante negociaciones teniendo en cuenta los intereses de los habitantes, no sus

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

deseos. La diferencia proporciona el interrogante final para el aula: si el propio orden británico regula quién ingresa, quién trabaja, quién permanece, quién pertenece y quién vota, ¿puede presentarse al cuerpo político resultante como un sujeto previo e independiente de esas mismas decisiones institucionales?

Esta arquitectura permite introducir, como problema jurídico e histórico, la categoría de "población trasplantada": para interrogar si la comunidad política existente puede ser considerada, sin más, un pueblo colonial separado de la potencia administradora. Desde 1833, la formación demográfica se pensó bajo administración británica y, posteriormente, el propio ordenamiento fue institucionalizando las condiciones de pertenencia. Esa continuidad resulta particularmente visible en el plano político: para integrar el registro electoral no basta con residir en las islas, sino que se requiere poseer *Falkland Islands Status*, ciudadanía británica, de un Territorio Británico de Ultramar o ciudadanía británica de ultramar, además de satisfacer los requisitos de edad y residencia. El sistema distingue así entre la fuerza de trabajo que la economía necesita y el núcleo habilitado para constituir el cuerpo electoral. Más que hablar de una población simplemente "controlable" —expresión difícil de sostener documentalmente—, puede hablarse con mayor precisión de una comunidad política jurídicamente delimitada, cuya reproducción institucional conserva una estrecha vinculación con la matriz británica de ciudadanía, pertenencia e identidad.

Los propios documentos de planificación permiten observar la racionalidad contemporánea de ese proceso. El *Islands Plan* ha planteado simultáneamente aumentar de manera "sostenible" la población y mantener la "identidad cultural", atraer trabajadores allí donde existen déficits de mano de obra y someter ese crecimiento a una política migratoria permanentemente supervisada; llegó a proyectar una población no transitoria cercana a 4.000 habitantes para 2035 y, en la reforma migratoria de 2021, explicitó que el objetivo era reducir la rotación y conseguir que una proporción mayor de quienes ya contribuían a la comunidad permaneciera de forma estable, sin "abrir las puertas a todos" (FIG, 2021, pp. 14, 28). El plan 2022-2026 agregó la modernización de los controles migratorios, el reforzamiento de la seguridad fronteriza y la profundización de la cooperación con las fuerzas británicas

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

desplegadas en el Atlántico Sur (FIG, 2022, pp. 20-21). Antes que un supuesto plan secreto de Londres, las fuentes permiten identificar una estrategia pública y verificable: sostener una población pequeña pero económicamente viable, incorporar selectivamente la fuerza de trabajo necesaria, favorecer el arraigo de quienes se integran a la comunidad y preservar simultáneamente su identidad política y cultural vinculada al Reino Unido. Es precisamente esa relación entre selección migratoria, pertenencia jurídica, reproducción demográfica e identidad británica la que permite problematizar, en el marco de la controversia de soberanía, la presentación del actual cuerpo político como un sujeto completamente anterior y autónomo respecto de la potencia que administra el territorio.

V. Disputa por las percepciones

Poder militar, poder blando, diplomacia pública, influencia y guerra cognitiva no son sinónimos. El concepto de *soft power* desarrollado por Joseph Nye alude a la capacidad de obtener resultados mediante atracción, legitimidad y persuasión antes que mediante coerción. La guerra cognitiva, en cambio, se refiere a una disputa más específicamente dirigida hacia las percepciones, interpretaciones y procesos mediante los cuales individuos y sociedades comprenden la realidad. Entre ambos existe una amplia zona de actividades legítimas —diplomacia cultural, cooperación científica, becas, comunicación estratégica— que pueden servir simultáneamente a objetivos genuinos de intercambio y a los intereses internacionales del Estado que las promueve.

Esta diferenciación evita dos simplificaciones igualmente inconvenientes. La primera consiste en imaginar que la única dimensión relevante de la presencia británica es la militar. La segunda, inversa, consiste en transformar automáticamente cualquier contacto cultural británico en una conspiración. Para enseñar pensamiento estratégico hay que evitar ambas. El documento que sirve de base a este cuaderno propone precisamente comprender la presencia británica como una arquitectura en la que interactúan capacidades militares, económicas, jurídicas, cognitivas, académicas, diplomáticas y biopolíticas. La pregunta educativa, por tanto, no debería ser simplemente «¿esto es propaganda?», sino otras más difíciles: ¿quién comunica?, ¿a quién?, ¿con

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

qué recursos?, ¿qué categorías utiliza?, ¿qué aspecto del problema hace visible?, ¿cuál deja fuera del encuadre?, ¿qué relaciones busca construir y qué efectos pueden producir esas relaciones a largo plazo?

El punto de partida continúa siendo material. Después de 1982 el Reino Unido modificó sustancialmente su despliegue militar en las islas, especialmente mediante *Mount Pleasant*. El texto base señala correctamente que esa infraestructura debe ser considerada el presupuesto estructural sobre el cual adquieren eficacia las restantes dimensiones del dispositivo. No tendría sentido, entonces, contraponer *hard power* y *soft power* como alternativas excluyentes. Una potencia puede utilizar simultáneamente capacidad militar para asegurar una posición territorial y poder blando para construir relaciones favorables alrededor de ella.

Aquí aparece una idea especialmente productiva para el aula: una posición estratégica se fortalece cuando deja de ser percibida como excepcional y comienza a incorporarse a las prácticas ordinarias de otros actores. Si el territorio controvertido aparece sucesivamente asociado con turismo, conservación ambiental, ciencia, comercio, intercambio estudiantil, agricultura o derechos individuales, el receptor puede terminar relacionándolo prioritariamente con esas categorías antes que con las categorías de colonialismo y controversia de soberanía. Eso no significa necesariamente que haya cambiado formalmente de posición diplomática. Significa algo más sutil: que puede haber cambiado el marco cognitivo desde el cual piensa el problema.

El fenómeno puede explicarse a los estudiantes mediante el concepto de encuadre (*framing*). Una fotografía puede mostrar exactamente la misma realidad y producir interpretaciones diferentes según dónde se coloque el marco. En Malvinas ocurre algo semejante. Hablar de “territorio sujeto a una disputa de soberanía” coloca en primer plano una controversia entre Argentina y Reino Unido. Hablar de una “pequeña comunidad democrática que desea relacionarse con sus vecinos sudamericanos” coloca en primer plano población, proximidad, derechos individuales y cooperación. El territorio es el mismo; cambia la pregunta mediante la cual se lo observa.

Esto adquiere particular relevancia porque Naciones Unidas mantiene un marco jurídico específico. La Cuestión Malvinas continúa siendo tratada

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

como una situación colonial especial y particular en la que existe una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido, cuya solución debe procurarse mediante negociaciones entre ambas partes teniendo en cuenta los intereses de los habitantes. El Comité Especial de Descolonización reiteró ese esquema nuevamente en 2025 y en 2026. Por eso, desde una perspectiva argentina, el desplazamiento discursivo de "disputa de soberanía" a "decisión de los isleños" no constituye un simple cambio terminológico: modifica el sujeto, la pregunta y el principio jurídico colocado en el centro de la discusión.

Un caso particularmente ilustrativo es el *Regional Student Competition*, impulsado por el *Falkland Islands Government* junto con representaciones diplomáticas británicas de América del Sur. En distintas ediciones, estudiantes universitarios de Argentina y de países de la región fueron invitados a elaborar videos en inglés y competir por un viaje a las islas. La convocatoria resulta especialmente significativa por la formulación de su consigna: "*Why would I like to meet my neighbours in the Falkland Islands?*" —"¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland?"—. En la edición 2024 participaron estudiantes de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, mientras que la convocatoria 2025/2026 volvió a involucrar a jóvenes sudamericanos y presentó oficialmente la iniciativa en términos de intercambio cultural y conocimiento de las islas y sus habitantes. No es necesario atribuir al programa una finalidad clandestina para advertir su relevancia desde la perspectiva del poder blando: son los propios términos públicos de la convocatoria los que permiten estudiar el encuadre mediante el cual se presenta la relación entre las islas y América del Sur.

La cuestión pedagógicamente más significativa no reside, por tanto, solamente en el viaje ofrecido a los estudiantes, sino en la categoría escogida para definir previamente la relación: "vecinos". La consigna no parte de la existencia de una controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, de la Resolución 2065 (XX), del proceso de descolonización o de la ocupación británica iniciada en 1833. El punto de partida es diferente: jóvenes sudamericanos que desean conocer a otros habitantes del espacio regional presentados como sus vecinos. De esta manera, antes de que se produzca el intercambio ya existe un determinado marco interpretativo. El territorio controvertido permanece

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

materialmente en el mismo lugar, pero la pregunta desde la cual se invita a conocerlo ha cambiado: de la controversia territorial se pasa al encuentro interpersonal; de la descolonización, a la proximidad geográfica; y de la relación Argentina-Reino Unido, a una relación aparentemente horizontal entre comunidades vecinas.

Esto permite explicar con particular claridad cómo funciona el poder blando. Su eficacia no requiere necesariamente obligar al destinatario a aceptar una posición política determinada ni transmitirle una consigna explícita. Puede actuar de manera mucho más gradual mediante la creación de experiencias, relaciones, familiaridades y vocabularios desde los cuales determinados problemas son posteriormente interpretados. El encuentro entre personas no es en sí mismo ilegítimo ni demuestra la existencia de una operación de manipulación; precisamente por ello constituye un caso pedagógicamente valioso. Permite mostrar que la política exterior contemporánea también se desarrolla mediante instrumentos que generan afinidad y relaciones duraderas y que, al hacerlo, pueden modificar paulatinamente los marcos dentro de los cuales una sociedad extranjera percibe determinado conflicto.

La dimensión regional refuerza esta interpretación. Uruguay constituye un ejemplo particularmente significativo debido a la continuidad de los vínculos desarrollados entre las islas y distintos actores de ese país. Los finalistas uruguayos del concurso estudiantil han realizado presentaciones en Expo Prado, dentro de espacios vinculados con la presencia institucional británica y ante representantes diplomáticos y de las islas. La elección del escenario no resulta indiferente desde el punto de vista comunicacional. Una exposición agroindustrial y comercial permite presentar a las islas dentro de un universo asociado con producción, agricultura, innovación, turismo, comercio y oportunidades económicas. La controversia territorial ingresa así en circuitos diferentes de los estrictamente diplomáticos y comienza a convivir con experiencias ordinarias de intercambio regional.

Este fenómeno se inscribe en una estrategia de diplomacia de proximidad más amplia. Durante años, actores británicos e isleños han procurado desarrollar relaciones con países sudamericanos, particularmente Uruguay y Chile, aunque también se registran iniciativas dirigidas hacia Argentina, Paraguay y Brasil. En el caso uruguayo,

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación
Observatorio Malvinas

documentos y comunicaciones oficiales británicas han destacado vínculos relacionados con trabajadores, provisión de bienes, servicios médicos, comercio, transporte e intercambios institucionales. Se configura así una trama de relaciones que permite presentar progresivamente a las islas no solamente como un territorio vinculado con el Reino Unido, sino también como un actor integrado de hecho a determinados circuitos económicos y sociales sudamericanos.

La situación plantea una aparente paradoja que resulta especialmente fértil para trabajar en el aula. La posición diplomática de un Estado y las relaciones efectivas desarrolladas por actores de su sociedad no necesariamente coinciden en intensidad ni evolucionan al mismo ritmo. Uruguay puede sostener en Naciones Unidas y en el MERCOSUR el reconocimiento de los derechos argentinos en la disputa de soberanía y, simultáneamente, empresas, trabajadores, universidades, estudiantes u organizaciones uruguayas pueden mantener relaciones con las islas. Algo semejante puede ocurrir en otros Estados latinoamericanos. No significa necesariamente que esos países hayan modificado su posición jurídica; demuestra, en cambio, que la política internacional contemporánea no se desarrolla exclusivamente entre cancillerías.

Esta situación permite introducir la distinción entre solidaridad declarativa y densidad relacional. Argentina conserva un importante respaldo latinoamericano en los organismos internacionales y regionales. MERCOSUR, CELAC y numerosos Estados han reiterado históricamente el reconocimiento de los derechos argentinos y el llamado a reanudar las negociaciones con el Reino Unido. Sin embargo, ese capital diplomático debe analizarse junto con la evolución de las relaciones económicas, culturales, educativas y sociales que la administración isleña y actores británicos consiguen establecer dentro de los mismos países. La cuestión estratégica no consiste entonces en afirmar que América Latina haya abandonado a la Argentina —conclusión que la evidencia diplomática no permite sostener—, sino en preguntarse hasta qué punto el respaldo declarativo se traduce en comportamientos regionales coherentes y sostenidos en otros ámbitos.

La diferencia resulta relevante porque ambas dimensiones operan sobre temporalidades distintas. Una declaración de una cumbre puede reafirmar periódicamente una posición jurídica; una relación comercial,

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

educativa o científica puede reproducirse cotidianamente durante años. Si los intercambios directos entre las islas y actores sudamericanos aumentan mientras el apoyo argentino permanece concentrado fundamentalmente en declaraciones diplomáticas, puede generarse progresivamente una distancia entre el mapa jurídico de la solidaridad regional y el mapa material de las relaciones regionales. Para los docentes, esta tensión ofrece una pregunta particularmente productiva: ¿puede un Estado respaldar jurídicamente a la Argentina y, al mismo tiempo, desarrollar en su interior relaciones económicas, educativas o institucionales que contribuyan indirectamente a la normalización internacional de la administración británica de las islas?.

Las becas internacionales constituyen un terreno particularmente relevante para analizar las formas contemporáneas del poder blando británico. *Chevening* no es simplemente una ayuda económica para estudiar en el exterior, sino el programa internacional de becas del Gobierno del Reino Unido, financiado por el *Foreign, Commonwealth & Development Office* (FCDO) y organizaciones asociadas. Sus propios requisitos permiten comprender su lógica: los candidatos deben poseer un título universitario, acreditar al menos dos años de experiencia laboral —2.800 horas—, postularse a tres cursos elegibles en universidades británicas y demostrar capacidades de liderazgo e influencia mediante experiencias concretas. Finalizados los estudios, además, el becario debe regresar a su país de origen durante un mínimo de dos años, mientras *Chevening* procura conservar posteriormente el vínculo a través de su comunidad internacional de exbecarios. El Estado británico selecciona profesionales con capacidad de incidencia, los incorpora durante un período significativo a su sistema universitario, académico e institucional y favorece luego su regreso a las sociedades donde continuarán desarrollando sus trayectorias profesionales.

La cuestión relevante no consiste en señalar individualmente a los becarios, sino en comprender la estructura dentro de la cual funciona el programa. En este sentido el poder británico contemporáneo puede estudiarse como un entramado en el que convergen dimensiones económicas, jurídicas, institucionales, culturales y discursivas; desde esa perspectiva, la educación y la formación de redes internacionales constituyen otra pieza de esa arquitectura. La pregunta crítica, entonces,

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

no es si *Chevening* "adoctrina", sino por qué la política exterior británica invierte recursos en identificar extranjeros con capacidades de liderazgo e influencia, formarlos en sus universidades, promover su retorno y conservar posteriormente vínculos con ellos.

Existe, sin embargo, un punto en el cual resulta indispensable diferenciar estas formas abiertas de poder blando de las operaciones encubiertas de influencia. El caso de la denominada Operación QUITO permite establecer con claridad esa frontera. Documentación correspondiente al *Joint Threat Research Intelligence Group* (JTRIG), unidad vinculada al *Government Communications Headquarters* (GCHQ), conocida posteriormente a partir de los materiales filtrados por Edward Snowden, proporciona evidencia de actividades británicas de inteligencia e influencia relacionadas con la disputa por Malvinas y con el espacio latinoamericano. A diferencia de una beca, un concurso estudiantil o una exposición comercial —instrumentos públicamente identificables—, aquí se ingresa en un terreno diferente: el de las capacidades estatales clandestinas orientadas a intervenir sobre entornos informativos y percepciones.

QUITO permite introducir específicamente el problema de las operaciones de información. Una acción de influencia no necesita conseguir que toda una población adopte expresamente la posición del actor que la desarrolla. En determinados contextos puede bastar con modificar prioridades, instalar determinados temas, introducir incertidumbre, aumentar costos reputacionales, aprovechar divisiones existentes o desplazar paulatinamente los marcos mediante los cuales una sociedad interpreta un conflicto. La dimensión cognitiva aparece entonces vinculada no sólo con aquello que una población cree, sino también con aquello que considera importante, con las preguntas que formula y con las categorías que utiliza para ordenar la realidad.

Las tecnologías digitales amplificaron extraordinariamente estas posibilidades. Las redes sociales permiten segmentar públicos, identificar comunidades específicas, multiplicar contenidos y dirigir mensajes diferentes hacia grupos diferentes. Al mismo tiempo, la circulación algorítmica dificulta muchas veces identificar el origen de un contenido, las razones de su difusión o los intereses que pueden encontrarse detrás de determinadas campañas. El ciudadano

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

contemporáneo ya no recibe información exclusivamente de un número limitado de periódicos, radios o canales de televisión; habita un ecosistema informacional en el que publicidad, entretenimiento, información, persuasión política y comunicación institucional pueden convivir en una misma pantalla. Enseñar guerra cognitiva supone, por ello, enseñar también alfabetización digital y trazabilidad de la información.

Entre el Estado y ese espacio social se encuentran, además, organizaciones civiles que participan activamente en la disputa por la representación internacional de las islas. La *Falkland Islands Association* (FIA) constituye un ejemplo particularmente relevante. Sus antecedentes se remontan al *Falkland Islands Emergency Committee*, organizado en 1968 en el contexto de las negociaciones anglo-argentinas, y su actividad contemporánea se orienta públicamente a respaldar la posición de los habitantes de las islas. La organización mantiene relaciones con actores políticos, parlamentarios, periodistas y otras instituciones, produce publicaciones y participa de la discusión pública vinculada con Malvinas. No se trata, por tanto, de caracterizarla como una estructura clandestina, sino de comprender su funcionamiento como una organización de incidencia, construcción de agenda y articulación de redes.

La FIA tampoco actúa en un vacío institucional. En torno a las islas existe un entramado más amplio integrado por la oficina del *Falkland Islands Government* en Londres, asociaciones de apoyo, organizaciones vinculadas con conservación ambiental, fondos de becas, instituciones académicas y redes parlamentarias. El propio trabajo que sirve de base a este cuaderno advierte que los campos académicos, las organizaciones civiles, los programas de financiamiento y las instituciones estatales pueden participar, desde posiciones diferentes, en la producción y circulación de determinados marcos interpretativos sobre el conflicto. Para estudiar estas relaciones con rigor debe evitarse presumir que cooperación significa subordinación o que contacto equivale a control. Lo metodológicamente correcto es reconstruir qué relación concreta existe entre cada actor: financiamiento, cooperación, intercambio, representación institucional, coincidencia de intereses, comunicación o pertenencia orgánica.

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

El docente puede representar esta arquitectura mediante un mapa de actores en el que aparezcan el Gobierno británico, el FCDO, las embajadas, el *Falkland Islands Government*, su oficina londinense, asociaciones civiles, universidades, organizaciones científicas, medios y plataformas digitales. La regla metodológica debe ser sencilla pero estricta: ninguna flecha sin una fuente que permita explicar qué significa esa conexión. De esta manera se evita tanto la ingenuidad —imaginar actores completamente aislados de relaciones de poder— como el conspiracionismo —suponer una dirección centralizada allí donde sólo existe cooperación, afinidad o contacto institucional—.

La dimensión más profunda de esta disputa aparece, finalmente, en el lenguaje. Las palabras utilizadas para describir un conflicto no constituyen elementos neutrales, porque seleccionan determinados aspectos de la realidad y relegan otros. Expresiones como *British Overseas Territory, self-government, right to choose, islanders, home, neighbours o economic development* organizan el problema de manera diferente de categorías como colonia, territorio ocupado, disputa de soberanía, población implantada o explotación unilateral de recursos. El documento de base observa precisamente que el empleo creciente de categorías como *British Overseas Territory, self-government* y *right to choose* participa de una resignificación de la controversia, desplazando progresivamente el eje desde la cuestión colonial hacia la representación de una comunidad políticamente autónoma.

El propósito pedagógico no debería consistir simplemente en reemplazar un vocabulario por otro, sino en enseñar a interrogar las palabras. Frente a cada denominación, el estudiante debería poder preguntarse quién la utiliza, cuándo comenzó a utilizarse, qué realidad describe, qué presupuestos contiene y qué elementos deja fuera del encuadre. Allí se encuentra una de las claves de la guerra cognitiva contemporánea: la disputa no se desarrolla solamente sobre las respuestas, sino también sobre la capacidad de determinar cuáles son las preguntas relevantes. Quien consigue establecer el vocabulario desde el cual un problema debe ser pensado obtiene una ventaja significativa en la producción de su sentido.

Algo semejante ocurre con la memoria histórica. Una narrativa británica centrada en 1982 puede organizarse mediante una secuencia

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

relativamente sencilla: desembarco argentino, experiencia de los habitantes, intervención militar británica, recuperación de las islas y reivindicación posterior de la autodeterminación. El enfoque argentino introduce necesariamente una temporalidad más extensa: actos de soberanía anteriores a 1833, creación de la comandancia de 1829, ocupación británica de 1833, protestas argentinas, proceso internacional de descolonización, Resoluciones 1514 (XV) y 2065 (XX), negociaciones bilaterales, Resolución 31/49, guerra de 1982 y desarrollo posterior de la controversia. No se trata solamente de agregar acontecimientos: modificar el comienzo de una historia modifica también las relaciones causales mediante las cuales esa historia adquiere sentido.

Esta constatación proporciona una herramienta pedagógica sencilla. El docente puede presentar dos líneas de tiempo elaboradas desde perspectivas diferentes y solicitar a los estudiantes que identifiquen qué acontecimientos aparecen, cuáles están ausentes, dónde comienza cada relato y qué consecuencia interpretativa produce esa selección. La actividad permite comprender que una narrativa puede construirse no sólo mediante afirmaciones falsas, sino también mediante selección, jerarquización y omisión de hechos verdaderos. Esta capacidad de distinguir entre falsedad y encuadre constituye una herramienta fundamental de alfabetización cognitiva.

Desde esta perspectiva adquiere especial relevancia la relación entre los compromisos regionales y su traducción práctica. El respaldo latinoamericano a la posición argentina constituye un capital diplomático importante y persistente. El problema no reside necesariamente en la ausencia de declaraciones, sino en determinar hasta qué punto esas declaraciones se convierten en políticas públicas, regulaciones y conocimientos sociales capaces de sostenerlas en el tiempo. Puede imaginarse un esquema de tres niveles: declaración, regulación y sociedad. En el primero, los gobiernos manifiestan una posición diplomática; en el segundo, esa posición se refleja en políticas sobre puertos, transporte, recursos, comercio, cooperación científica u otras materias; en el tercero, universidades, empresas, medios, docentes, científicos y ciudadanos conocen las razones históricas y jurídicas que fundamentan esa política.

Cuando el compromiso permanece fundamentalmente en el primer nivel,

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

puede conservar una considerable importancia diplomática y, sin embargo, poseer una densidad social comparativamente menor. Allí adquieren importancia las estrategias de poder blando: mientras la diplomacia trabaja periódicamente mediante declaraciones, la construcción de relaciones puede desarrollarse de manera cotidiana mediante experiencias personales, oportunidades académicas, actividades comerciales, intercambios culturales y redes profesionales. La cuestión estratégica consiste, entonces, en observar simultáneamente ambos procesos y preguntarse si existe correspondencia entre la posición formal de los Estados latinoamericanos y la evolución material de sus relaciones con el enclave.

Cuando el compromiso regional permanece principalmente en el plano declarativo, puede conservar una considerable importancia diplomática y, sin embargo, alcanzar una densidad social y material mucho menor. Allí adquiere relevancia el poder blando: mientras las posiciones oficiales se expresan periódicamente en organismos internacionales, la construcción de vínculos puede desarrollarse de manera cotidiana mediante intercambios educativos, relaciones comerciales, cooperación científica, becas, actividades culturales y redes profesionales. Para la enseñanza, esta diferencia permite trabajar Malvinas más allá de la efeméride: en el nivel primario, interrogando mapas, nombres, imágenes y representaciones del territorio; en el secundario, comparando noticias, campañas, concursos, líneas de tiempo y documentos argentinos y británicos; y en el superior, reconstruyendo redes institucionales, financiamientos y estrategias de influencia, desde las formas abiertas del *soft power* hasta experiencias documentadas de operaciones de información como QUITO. La regla metodológica puede resumirse en una consigna sencilla: seguir el mensaje y seguir la red, preguntando siempre quién produce un contenido, quién lo financia, a qué público se dirige, qué lenguaje utiliza, qué hechos selecciona, cuáles omite y qué vínculos comprobables existen entre los actores involucrados.

El objetivo último es formar una verdadera soberanía cognitiva, entendida no como aislamiento, rechazo del intercambio internacional ni sustitución de una propaganda por otra, sino como capacidad para conocer perspectivas diferentes sin perder autonomía para contextualizarlas, contrastarlas y formular preguntas propias. Malvinas

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

ofrece, en este sentido, un laboratorio privilegiado para comprender el poder contemporáneo: junto a *Mount Pleasant*, expresión material de la capacidad militar británica, operan recursos económicos, normas, diplomacia, becas, universidades, asociaciones, medios, redes digitales y vocabularios capaces de producir representaciones sobre el territorio y sus habitantes. La guerra cognitiva no consiste solamente en difundir información falsa; puede operar también mediante la selección, jerarquización y omisión de hechos, hasta conseguir que determinadas preguntas desaparezcan del campo de visión. Por eso, la tarea docente no consiste en indicar qué debe pensar el estudiante, sino en enseñarle cómo se construye aquello que se le propone pensar. Allí reside una dimensión esencial de la educación para la soberanía: formar ciudadanos capaces de reconocer que, en las disputas contemporáneas, quien consigue definir las preguntas condiciona también el universo de respuestas posibles.

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

